



CERTIFICACIÓN DE ACUERDO RELATIVO A INFORME

Acto que se certifica: Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 30 de marzo de 2023, por el que se ha aprobado el siguiente:

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ARANCEL DE DERECHOS DE LOS PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 20 de diciembre de 2022, procedente de la Secretaría de Estado de Justicia del Ministerio de Justicia, tuvo entrada en el Consejo General del Poder Judicial, a efectos de la evacuación del correspondiente informe, conforme a lo dispuesto en el artículo 561.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. El texto remitido viene acompañado de la correspondiente Memoria del Análisis de Impacto Normativo del Proyecto (MAIN en adelante).

2.- La Comisión Permanente del Consejo, en su reunión del día 12 de enero de 2023, designó Ponente de este informe a los Vocales Don José María Macías Castaño y Doña Pilar Sepúlveda García de la Torre.

II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA FUNCIÓN CONSULTIVA DEL CGPJ

3.- La función consultiva del Consejo General del Poder Judicial a que se refiere el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en la redacción dada a dicho precepto por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio), tiene por objeto los anteproyectos de leyes y disposiciones generales que afecten total o parcialmente, entre otras materias expresadas en el citado precepto legal, a "[n]ormas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales", a "[n]ormas que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los Tribunales" y "cualquier otra cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso, las Asambleas Legislativas



de las Comunidades Autónomas estimen oportuna” (apartados 6, 7 y 9 del art. 561.1 LOPJ).

4.- A la luz de esta disposición legal, en una correcta interpretación del alcance y sentido de la misma, el parecer que le correspondería emitir al Consejo General del Poder Judicial sobre el Proyecto remitido debería limitarse a las normas que en él se incluyen específicamente, evitando cualquier consideración sobre cuestiones ajenas al Poder Judicial o al ejercicio de la función jurisdiccional que éste tiene encomendada.

5.- Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo General del Poder Judicial ha venido indicando la oportunidad de efectuar en sus informes otras consideraciones relativas, en particular, a cuestiones de técnica legislativa o de orden terminológico, con el fin de contribuir a mejorar la corrección de los textos normativos y, por consiguiente, a su efectiva aplicabilidad en los procesos judiciales, por cuanto son los órganos jurisdiccionales quienes, en última instancia, habrán de aplicar posteriormente las normas sometidas a informe de este Consejo, una vez aprobadas por el órgano competente.

III. CONSIDERACIONES GENERALES AL PROYECTO

a) Estructura y contenido del Proyecto objeto de informe

6.- El Proyecto que se informa está integrado por un Preámbulo o Exposición de Motivos, tres artículos y de una parte final, integrada por una disposición transitoria única, una disposición derogatoria única y dos disposiciones finales. Asimismo, se incorpora al proyecto el texto del arancel de derechos de los procuradores de los tribunales objeto de aprobación con ochenta y cinco artículos, estructurados y rubricados, todos ellos, con un título indicativo del contenido o la materia a la que se refieren, como sigue:

Artículo 1. Aprobación del arancel.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Artículo 3. Presupuesto previo.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Disposición final primera. Título competencial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

ARANCEL DE DERECHOS DE LOS PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES.



TÍTULO I. Disposiciones generales aplicables a todos los órdenes jurisdiccionales.

Artículo 1. Devengo de los aranceles.

Artículo 2 Procedimientos de cuantía determinada.

Artículo 3. Procedimientos de cuantía indeterminada. Otros procedimientos.

Artículo 4. Carácter supletorio de las previsiones arancelarias ante el orden jurisdiccional civil.

Artículo 5. Sustitución de procuradores en una misma representación.

Artículo 6. Multirepresentación.

Artículo 7. Auxilio judicial y otros actos de cooperación con la administración de justicia.

Artículo 8. Tasación de costas. Impugnación.

Artículo 9. Liquidación de intereses.

Artículo 10. Incidencias.

Artículo 11. Consignaciones y depósitos para recurrir por el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

Artículo 12. Copias en soporte papel, formato digital y grabaciones en soportes ópticos.

Artículo 13. Desglose de documentos, solicitud de testimonios y certificaciones.

Artículo 14. Designación de procurador a los solos efectos de recibir notificaciones.

Artículo 15. Reintegro de los gastos suplidos.

Artículo 16. Conservación de justificantes.

Artículo 17. Cuenta de procurador.

TÍTULO II. Orden Civil.

CAPÍTULO I.

Artículo 18. Base de cálculo. Determinación de la cuantía.

Artículo 19. Cuestiones de competencia, incidentes de acumulación, recusación, nulidad y reconstrucción de autos.

Artículo 20. Diligencias preliminares.

CAPÍTULO II. Procesos especiales



Artículo 21. Procesos sobre medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad, filiación y menores.

Artículo 22. Procesos matrimoniales y de familia.

Artículo 23. División judicial de patrimonios.

Artículo 24. Procedimiento monitorio.

Artículo 25. Juicio cambiario.

Artículo 26. Juicios hipotecarios.

Artículo 27. Patentes, marcas, propiedad industrial, intelectual, publicidad y competencia desleal.

Artículo 28. Sociedades mercantiles.

Artículo 29. Laudo arbitral. Anulación, revisión y ejecución.

Artículo 30. Justicia gratuita.

Artículo 31. Títulos nobiliarios.

CAPÍTULO III. Procedimientos Concursales.

Artículo 32. Base de cálculo de los procedimientos concursales.

Artículo 33. Cuantificación.

Artículo 34. Percepción por secciones.

Artículo 35. Otros supuestos de devengo.

Artículo 36. Incidentes concursales.

Artículo 37. Enajenaciones en procesos concursales.

Artículo 38. Comunicación de la apertura de negociaciones. Homologación e impugnación del acuerdo de refinanciación.

CAPÍTULO IV. Ejecución y medidas cautelares.

Artículo 39. Disposiciones comunes.

Artículo 40. Ejecución de títulos judiciales y no judiciales.

Artículo 41. Ejecución de obligaciones de hacer, no hacer y entrega de cosa.

Artículo 42. Ejecución provisional.

Artículo 43. Toma de posesión y lanzamiento.

Artículo 44. Liquidación de daños y perjuicios, frutos y rentas.

Artículo 45. Medidas cautelares.



CAPÍTULO V. Actos de conciliación, jurisdicción voluntaria y registro civil.

Artículo 46. Actos de conciliación.

Artículo 47. Jurisdicción voluntaria.

Artículo 48. Registro civil.

CAPÍTULO VI. Recursos.

Artículo 49. Recurso de reposición, revisión. Petición de aclaración, subsanación y complemento.

Artículo 50. Recurso de apelación.

Artículo 51. Recurso de queja.

Artículo 52. Recurso extraordinario de infracción procesal, recursos de casación foral y por infracción de normas.

Artículo 53. Recurso en interés de ley.

TÍTULO III. Orden penal, Juzgados de menores y Vigilancia penitenciaria

CAPÍTULO I. Orden Penal.

Artículo 55. Fase de instrucción.

Artículo 56. Juicios rápidos y juicios por delitos leves.

Artículo 57. Procedimientos de especial complejidad.

Artículo 58. Procedimiento abreviado.

Artículo 59. Juicio oral.

Artículo 60. Actuaciones ante órganos colegiados.

Artículo 61. Recursos en el orden penal.

Artículo 62. Períodos de percepción.

Artículo 63. Recursos de casación y revisión.

Artículo 64. Inadmisión de recursos.

Artículo 65. Ejecutorias penales y ejecución de los pronunciamientos sobre responsabilidad civil.

Artículo 66. Acción civil.

CAPÍTULO II. Procedimientos de menores.

Artículo 67. Primera y segunda instancia.

CAPÍTULO III. Juzgados de vigilancia penitenciaria.



Artículo 68. Primera y segunda instancia ante los juzgados de vigilancia penitenciaria.

TÍTULO IV. Orden contencioso administrativo y de las Administraciones Públicas.

CAPÍTULO I. Orden contencioso-administrativo.

Artículo 69. Procedimiento abreviado, ordinario y especiales.

Artículo 70. Inadmisión, caducidad, desistimiento del recurso. Reconocimiento en vía administrativa de las pretensiones objeto del recurso.

Artículo 71. Medidas cautelares.

Artículo 72. Ampliaciones y acumulaciones.

Artículo 73. Recursos contra resoluciones procesales y judiciales.

Artículo 74. Recursos contra sentencias y autos.

Artículo 75. Recursos extraordinarios.

Artículo 76. Procedimientos de ejecución.

CAPÍTULO II. Actuaciones ante las Administraciones Públicas.

Artículo 77. Actuaciones ante las Administraciones Públicas.

TÍTULO V. Orden Social.

Artículo 78. Actos de conciliación.

Artículo 79. Procedimientos de orden social.

Artículo 80. Recursos.

Artículo 81. Procedimientos de ejecución.

TÍTULO VI. Jurisdicción militar.

Artículo 82. Procedimientos ante la Jurisdicción Militar.

TÍTULO VII. Actuaciones ante Órganos no jurisdiccionales.

CAPÍTULO I. Actuaciones ante el Tribunal Constitucional.

Artículo 83. Procedimientos y medidas cautelares.

CAPÍTULO II. Actuaciones ante el Tribunal de Cuentas.

Artículo 84. Tribunal de Cuentas.

CAPÍTULO III. Tribunales Eclesiásticos.

Artículo 85. Causas de separación y nulidad.



7.- Asimismo, la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN en adelante), que acompaña al Proyecto, con arreglo al Real Decreto 931/2017, de 3 de julio, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, aborda las siguientes áreas:

I.- Oportunidad de la propuesta, con cinco apartados: el primero dedicado a la motivación de la propuesta, el segundo, a los objetivos perseguidos, el tercero, sobre el análisis de alternativas, el cuarto en relación a la adecuación a los principios de buena regulación, y el quinto al Plan Anual Normativo 2022.

II.- Contenido, con dos apartados: el primero dedicado a las principales novedades introducidas por el proyecto, y el segundo dedicado al contenido.

III.- Análisis jurídico, con cinco apartados: el primero dedicado al fundamento jurídico y rango normativo, el segundo a la congruencia con el Derecho de la Unión Europea, el tercero a la congruencia con el ordenamiento jurídico español, el cuarto a la entrada en vigor y vigencia y el quinto a la derogación normativa.

IV. Adecuación al orden constitucional de competencias.

V. Análisis de Impactos. Dividido en impacto económico y sobre la competencia, impacto presupuestario, cargas administrativas, impacto por razón de género, en la infancia y adolescencia y en la familia, impacto por razón del cambio climático y otros impactos.

VI. Evaluación *ex post*, indicando que, De acuerdo con el Plan Anual Normativo para el año 2022, la presente norma no aparece identificada entre el conjunto de proyectos que habrán de someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación.

7. Anexos.

1. Anexo I. Alegaciones recibidas en el trámite de consulta pública previa.
2. Anexo II. Alegaciones recibidas en el trámite de audiencia e información pública.

b) Antecedentes

8.- Como consecuencia de la primera Asamblea de Decanos y Representantes de los Colegios de Procuradores de las Audiencias de España, celebrada el 20



de noviembre de 1872 en Madrid, se plantea la necesidad de dar respuesta a la cuestión arancelaria, si bien, hasta 1911 no se publica el primer arancel específico separado e independiente del arancel judicial. Constituida por Decreto de 23 de septiembre de 1943 la Junta Nacional de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, una de sus primeras preocupaciones fue intentar un incremento de los aranceles, creándose en 1948 una comisión arancelaria, cuyos trabajos tuvieron su fruto con la publicación del Decreto de 19 de octubre de 1951 por el que se aprueban los Aranceles Judiciales, que fueron modificados y revisados por decreto de 19 de febrero de 1954.

9.- Por Orden del Ministerio de Trabajo de 13 de diciembre de 1960 se aprobaron los Aranceles de los Procuradores para Magistratura de Trabajo y Tribunal Central de Trabajo, regulándose los derechos por actuaciones ante la Justicia Municipal y la Jurisdicción Criminal por Decreto de 10 de junio de 1965.

10.- Un nuevo arancel, que sustituía al aprobado dieciséis años antes, se aprobó por Decreto 1457/1967, de 3 de junio por el que se regula el Arancel de derechos de los Procuradores de los Tribunales por su intervención en asuntos civiles en los Juzgados de Primera Instancia y Audiencias Territoriales, Salas de lo Contencioso-administrativo en estas últimas y en todo caso ante el Tribunal Supremo, revisándose el de la Jurisdicción Criminal por Decreto 3599/1972, de 14 de diciembre, por el que se regulan los aranceles de los Procuradores de los Tribunales por su intervención en la Jurisdicción Criminal y ante los Tribunales tutelares de menores, y el de la Jurisdicción Laboral por Orden de 26 de mayo de 1973 sobre arancel de los honorarios a percibir por los Procuradores de los Tribunales, en sus actuaciones en la Jurisdicción Laboral.

11.- Tras sucesivas reformas en 1974, 1978 y 1981 en materia civil, y en 1979 en materia criminal, por Real Decreto 1030/1985, de 19 de junio, por el que se aprueba el Arancel de Derechos de los Procuradores de los Tribunales, se aprueba un nuevo arancel que por primera vez es general y específico al contemplar todos los órdenes jurisdiccionales.

12.- El Real Decreto 1162/1991, de 22 de julio, por el que se aprueba el Arancel de Derechos de los Procuradores de los Tribunales, abordaba la reforma del arancel tras haberse producido cambios estructurales por motivo de la supresión de los Juzgados de Distrito que, al igual que las Audiencias Territoriales habían desaparecido con la Ley de Planta. Este arancel prevenía



en su Disposición adicional la posibilidad de actualización de las cantidades fijas a fin de adaptarlas a las variaciones del índice de precios al consumo, lo que por Orden de 17 de mayo de 1994, por la que se revisan las cuantías fijas del Arancel de derechos de los Procuradores de los Tribunales aprobados por Real Decreto 1162/1991, de 22 de julio, se operó, aplicándose un índice revisor del 12.4%, aprobándose la adaptación del arancel al euro por Resolución de 14 de diciembre de 2001, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia (rectificada), por la que se da publicidad a las equivalencias pesetas-euros de las cuantías del Arancel de Derechos de los Procuradores de los Tribunales.

13.- En el año 2003 se aprueba el Estatuto General de los Procuradores por Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España que, en su artículo 34, establece: "1. Los procuradores en su ejercicio profesional, percibirán los derechos que fijen las disposiciones arancelarias vigentes. A falta de pacto expreso en contrario se estará estrictamente a lo dispuesto en las disposiciones arancelarias vigentes. 2. Las Juntas de Gobierno podrán exigir a sus colegiados que acrediten el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, incluso con exhibición de las facturas de suplidos y derechos y su reflejo contable."

14.- El Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales se dictó con la finalidad de sustituir al Real Decreto 1162/1991, de 22 de julio, y ello, según su Exposición de Motivos -que menciona expresamente el Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre- por motivo de las nuevas funciones que la legislación atribuye a los procuradores y las numerosas reformas procesales acaecidas desde 1991, siendo necesario, por ello, aprobar un nuevo Real Decreto regulador de los aranceles, adaptando las cuantías de los mismos a la vez que se adecuan a las nuevas funciones e introduciendo criterios de libre competencia entre estos profesionales, al facultárseles para pactar con el cliente un incremento o una disminución de hasta doce puntos porcentuales sobre las cuantías del arancel.

15.- Finalmente, por Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, se ha dado cumplimiento de modo parcial a lo previsto en el apartado 2 de la Disposición final primera de la Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones



de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. La Disposición final primera mencionada imponía al Gobierno la aprobación, a propuesta del Ministerio de Justicia, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la citada Ley, de un real decreto por el que se modificase el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. Todo ello vino motivado por cuanto, en el marco del procedimiento establecido en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra el Reino de España, en relación con la procura, por entender que el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, contravenía el Derecho de la Unión Europea. Por tal razón y, en aras de dar cumplimiento a los requerimientos formulados por la Comisión Europea, a tenor de lo recogido en la Exposición de Motivos, este Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, tuvo como objetivo acomodar el sistema de aranceles de los procuradores de los tribunales al Derecho de la Unión Europea, estableciendo los ajustes estrictamente necesarios.

c) Oportunidad del nuevo arancel sobre los derechos de los procuradores

16.- Como afirma la Exposición de Motivos del proyecto sometido a informe, el Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, estableció un régimen transitorio determinándose que la nueva naturaleza del arancel de máximos se aplicaría exclusivamente a los procedimientos que se inicien con posterioridad a su entrada en vigor, que se produjo en fecha de 5 de mayo pasado. Como consecuencia del referido Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, resulta necesario proceder a la adecuación del propio texto del arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, que se aprobó mediante el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, a cuyo fin se elabora el Proyecto que se informa, que completa, en consecuencia, la actualización del arancel en atención a las modificaciones ya operadas por el citado Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo.

17.- En relación con esta cuestión, a la vista de la última reforma del arancel efectuada por el Real Decreto 397/2022, de 3 de mayo, y según lo expuesto por la MAIN, *«[e]l proyecto se encuentra justificado por la necesidad de*



completar la adecuación de la regulación nacional de los aranceles de los procuradores a la realidad actual del ejercicio de la profesión de procurador como agente colaborador de la administración de justicia. En ese sentido, conviene, a efectos de dotar de transparencia el ejercicio de la profesión de procurador, tener precios de referencia máximos que los consumidores conozcan con antelación para dotar de la publicidad necesaria al mercado en línea con las medidas que fueron introducidas por el Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo. Con ello, se da cumplimiento efectivo y completo al mandato contenido en el apartado 2 de la disposición final primera de la Ley 15/2021, de 23 de octubre».

18.- Por todo lo anterior, el examen del Proyecto objeto de informe ha de abordarse necesariamente desde las razones que están en su origen y en los objetivos que persigue. En relación con ello, la MAIN -de acuerdo con el preámbulo- explica que «[m]ediante el Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales se ha dado cumplimiento de modo parcial a lo previsto en el apartado 2 de la disposición final primera de la Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. El Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, se aprobó en atención a que la Comisión Europea había tramitado un procedimiento de infracción contra el Reino de España, en relación con la procura, por entender que el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, contravenía el derecho de la Unión Europea, en particular, considerando que estos aranceles pueden suponer una restricción, tanto a efectos del artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sobre libertad de establecimiento y del artículo 56, sobre libre prestación de servicios, como a tenor del artículo 15, apartado 2, letra g) y del artículo 16 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Por tal razón y, en aras de dar cumplimiento a los requerimientos formulados por la Comisión Europea, el objetivo de dicho Real Decreto fue acomodar el sistema de aranceles de los procuradores de los tribunales al derecho de la Unión Europea, estableciendo los ajustes estrictamente necesarios. Así, se procedió a suprimir los aranceles mínimos obligatorios y se estableció un sistema de aranceles máximos, con la finalidad de garantizar la debida protección de los



ciudadanos que acceden a la Administración de Justicia y lograr una mayor agilidad en la prestación del servicio. Y se incorporó al Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, la obligatoriedad de presentar por parte del procurador de los tribunales a su cliente, un presupuesto previo, en el que se hará constar, de forma expresa, en su caso, si se hubiera ofrecido en el arancel propuesto una disminución respecto del arancel máximo previsto en la normativa. Ello con la voluntad de informar a los consumidores y usuarios de los servicios profesionales de los procuradores de los tribunales del nuevo sistema de libertad de aranceles establecido y de evitar la aplicación automatizada de los aranceles máximos, al tiempo que se dio relevancia a la negociación del precio de prestación del servicio entre el procurador de los tribunales y su cliente, en un entorno libre de competencia, sin perjuicio de la existencia de un arancel máximo que sirva de protección al consumidor. Así, se incorporó la posibilidad de un pacto entre las partes para la disminución de los aranceles. Con todo ello, se ha fortalecido la libre competencia entre los profesionales y el procurador y su cliente gozan de libertad para pactar la retribución de los servicios profesionales prestados por aquél, con el único límite que comporta no superar los precios máximos en que se transforman los derechos arancelarios. Como consecuencia del referido Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, resulta necesario proceder a la adecuación plena del propio texto del arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, a cuyo fin se aprueba el presente real decreto, que completa, en consecuencia, la actualización del arancel en atención a las modificaciones ya operadas por el citado Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo». Por ello, continúa la MAIN, «[e]l objetivo del real decreto es la aprobación del arancel de los derechos de los procuradores de los tribunales, que venga a sustituir al vigente, con la finalidad de dar cumplimiento al mandato legal previsto en el apartado 2 de la disposición final primera de la Ley 15/2021, de 23 de octubre y de conformidad con las previsiones contenidas en el Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo. Al efecto, el nuevo arancel procede a actualizar las cuantías que resultarán aplicables para cada tipo de proceso, incorporando los nuevos procedimientos en los que actualmente participan estos profesionales que no existían en 2003».

19.- De esta forma, como ya se dijo en el informe de este Consejo sobre el Proyecto del Real Decreto por el que se aprueba el arancel de los procuradores de los tribunales, aprobado por el Pleno en fecha 20 de abril de 2022, en la medida en que la reforma proyectada pretende dar respuesta a las objeciones planteadas por la Comisión Europea en relación con el régimen de aranceles de la procura española, resulta de todo punto necesario referir con carácter previo los antecedentes del procedimiento de infracción



2015/4062, como origen del Proyecto, toda vez que, en definitiva, el núcleo del análisis que corresponde hacer en este informe a este órgano constitucional ha de centrarse en la adecuación del texto proyectado a las exigencias de la Comisión Europea, sin analizar las dudas suscitadas a ésta por el sistema de aranceles regulado en el citado Real Decreto desde la perspectiva de los artículos 15 y 16 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva Servicios) -que dieron lugar al Dictamen motivado de la Comisión-, ni tampoco la jurisprudencia del TJUE relativa a la aplicación de la Directiva, sobre la que únicamente conviene citar la Sentencia del TJUE, de 8 de diciembre de 2016, en los asuntos acumulados C-532/15 y C-538/15 (ECLI:EU:C:2016:932), en la que se analizó la conformidad del sistema español de aranceles de los procuradores desde la perspectiva de los artículos 101 y 56 del TFUE, cuestionando el cumplimiento de los requisitos de proporcionalidad y necesidad en el sentido del artículo 15, apartados 2.g) y 3, de la Directiva de Servicios, y que concluyó afirmando que el artículo 101 del TFUE no se opone a la normativa nacional controvertida, y que las disposiciones del TFUE en materia de libre prestación de servicios *«no se aplican a una situación en la que todos sus elementos están circunscritos al interior de un único Estado miembro»*.

20.- Ha de destacarse que en el Boletín Oficial del Estado del 25 de octubre de 2021 se ha publicado la Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. Esta reciente Ley que ha venido a reformar el sistema arancelario de la procura, cuya disposición final primera, “[h]abilitación reglamentaria”, impone al Gobierno la aprobación, a propuesta del Ministerio de Justicia, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la citada Ley, de un real decreto por el que se modifique el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales (apartado 2).

21- A lo expuesto ha de añadirse que la valoración de la adecuación del texto proyectado a las exigencias de la Comisión, en nuestro caso, ha de tener en cuenta lo manifestado en el informe, aprobado en el Pleno celebrado el día 31 de enero de 2019, al anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y



Procurador de los Tribunales así como determinadas disposiciones contenidas en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales y el Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, toda vez que parte del contenido del Proyecto aquí informado se enmarca previsiones recogidas en el citado Anteproyecto de Ley.

22.- Los procuradores, como los abogados, desarrollan una actividad de servicios que debe ser respetuosa con las exigencias de los artículos 49 - libertad de establecimiento- y 56 -libre prestación de servicios- del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea -TFUE, en lo sucesivo-. Por otro lado, y aunque no exista una armonización sectorial concreta de las actividades de abogados y procuradores, ello no es contradictorio con el hecho de que los preceptos citados del TFUE sean de aplicación a dichas actividades y que igualmente se encuentren comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a servicios en el mercado interior -Directiva de Servicios-, según la delimitación de ese ámbito que se hace en su artículo 2.

23.- Las anteriores afirmaciones son asumidas sin controversia alguna por parte de la Comisión Europea, del Gobierno de España y del legislador -Ley 25/2009, de 22 de noviembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, artículo 48-. Ello supone que las restricciones al libre ejercicio de esas profesiones y a la libertad de establecimiento sólo son admisibles si se justifican en una razón imperiosa de interés general y no son discriminatorias ni desproporcionadas, de manera que las eventuales restricciones se conecten causalmente con la causa de interés general que supuestamente las justifican y no vayan más allá de lo necesario para satisfacer esa razón imperiosa de interés general.

24.- Si no se satisfacen esos requisitos, las restricciones establecidas para la actividad de servicios -y, entre ellas, la procura- implicarían un incumplimiento o violación de los arts. 49 y 56 TFUE y de la Directiva de Servicios.

25.- Dicho lo anterior, los antecedentes que han de traerse a colación del Proyecto objeto de informe principian con el procedimiento de diálogo estructurado -procedimiento EU Pilot 2171/2011- que la Comisión acordó iniciar a la vista de varias denuncias relacionadas con la regulación de la procura en España, y que se tradujo en la carta de emplazamiento enviada



al Gobierno de España el 19 de junio de 2015 en la que se solicitó justificación de las restricciones aplicables a la actividad de los procuradores. El diálogo dio lugar a seis cartas de respuesta del Gobierno de España enviadas entre el 14 de octubre de 2011 y el 11 de abril de 2016, y a diversas reuniones sostenidas en los meses de septiembre de 2013, marzo de 2014 y octubre y diciembre de 2015.

26.- En términos sucintos, la Comisión consideró que la regulación española de la procura incurría en restricciones desproporcionadas y no justificadas de los arts. 49 y 56 TFUE en relación, entre otros aspectos, con la existencia de un arancel de mínimos con un margen de descuento como el vigente en España, que entendía que debía adecuarse a dichos preceptos y a la Directiva de Servicios.

27.- En particular, la Comisión consideró que el arancel de mínimos con un margen de descuento constituía una restricción a la libre prestación de servicios que no tenía un amparo real en las supuestas razones imperiosas de interés general alegadas por el Gobierno: protección de los consumidores y buena Administración de Justicia. Así, en lo que se refiere a la supuesta protección de los consumidores, que se pretendía justificar bajo el argumento de que asegurando unos aranceles mínimos para los procuradores se garantizaba la buena calidad del servicio, la Comisión afirmó que no existe ninguna relación entre uno y otro extremo, y que la buena calidad del servicio se garantiza por otros medios, como asegurar la correcta aplicación de las normas deontológicas o la buena capacitación técnica de los profesionales. De manera literal, la Comisión puso de manifiesto lo siguiente:

«La Comisión es de la opinión de que las tarifas mínimas reguladas, en lugar de proteger a los destinatarios de los servicios, perjudican esencialmente a los destinatarios de los servicios y protegen el interés de los procuradores, garantizando que reciban unos ingresos mínimos, independientemente de la calidad de su trabajo. La Comisión observa que si el verdadero objetivo de las tarifas mínimas obligatorias es proteger a los procuradores, también de los potenciales competidores que ofrezcan los mismos servicios a un precio inferior, debería considerarse como un objetivo de carácter económico que no puede justificar una restricción de las libertades».

28.- En lo que se refiere a la buena Administración de Justicia, la Comisión razonó que le resultaba difícilmente comprensible que se realizase esa afirmación y, al mismo tiempo, se expusiese que, en determinados procedimientos ante la jurisdicción social, la civil y la penal -y puede añadirse también la contencioso-administrativa- se previese que la representación



técnica y los actos de comunicación podían ser asumidos por otros profesionales cuyos honorarios no están sujetos a arancel -graduados sociales y abogados-, lo que evidenciaba la falta de conexión entre la existencia de la tarifa y el supuesto fin que la justifica.

29.- En las anteriores circunstancias, el Gobierno de España se comprometió en marzo de 2014 a llevar a cabo una reforma de la legislación sobre servicios profesionales y colegios profesionales que la propia Comisión afirmó que se produce en términos «*menos ambiciosos*» que los reclamados por ella misma, incluyéndose en el compromiso asumido por el Gobierno de España la supresión del arancel mínimo estableciendo un máximo, de manera que los honorarios serían en todo caso negociables con un máximo total de 75.000 €. Así, la reforma normativa vinculada a las objeciones planteadas por la Comisión en relación con el sistema de aranceles de los procuradores, según el Ministerio de Justicia, se llevaría a efecto a través de una modificación del Real Decreto 1373/2003.

30.- Cumple recordar que en el Informe del CGPJ, aprobado en el Pleno celebrado el día 31 de enero de 2019, al Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales así como determinadas disposiciones contenidas en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales y el Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas temporales, ya se puso de manifiesto que la reforma del arancel de los procuradores planteada a través del proyecto de modificación del Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, era *“insatisfactoria y no cumple con la supuesta finalidad que la justifica, que es cumplir con los requerimientos de la Comisión para adaptar nuestro ordenamiento a las exigencias del Derecho de la Unión Europea. De hecho, y en los términos en que viene planteada, el Consejo entendería que la Comisión llegase a la conclusión de que la norma proyectada es un simple diferimiento del problema que, se insiste, es adecuarse al Derecho de la Unión Europea y que permanecería incumplido”*.

31.- En dicho Informe, este órgano constitucional expuso que, tanto la Comisión Europea en el procedimiento de infracción 2015/4062, como también, en el ámbito interno, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia –CNMC en lo sucesivo, y lo ha hecho así en varios informes desde los años 90 y lo vuelve a hacer en su informe de 22 de marzo de 2018, precisamente en relación con el anteproyecto de Ley por la que se modifica



la Ley 34/2006-, consideran que el establecimiento de una tarifa mínima por prestación de servicios profesionales es incompatible con las exigencias propias de un marco de competencia efectiva.

32.- El Gobierno de España propuso una serie de reformas legales para solventar cualquier duda sobre la compatibilidad de la normativa española sobre la procura con el Derecho de la Unión, respetando plenamente el efecto útil de la Directiva de Servicios, respondiendo a ello la Comisión, en una carta registrada de entrada el 21 de diciembre de 2018 en la Representación Permanente de España en la Unión Europea, que acogía *"con satisfacción estas propuestas presentadas por las autoridades españolas"*, a lo que añadía que, *"solo en virtud de las reformas adoptadas, la Comisión podría considerar el cierre del procedimiento de infracción, mientras que, en caso contrario, podría verse obligada a reconsiderar su posición y a seguir con el procedimiento de infracción mediante la remisión al TJUE"*.

33.- El Consejo de Estado, en su Dictamen 88/2019, de 18 de febrero, emitido en relación al Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, puso de manifiesto que con posterioridad a la emisión del Dictamen motivado de la Comisión y a la respuesta al mismo se había aprobado y publicado la Directiva (UE) 2018/958 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, DOUE de 9 de julio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones (Directiva de Proporcionalidad), cuyo contenido, a pesar de que la norma proyectada no se dirigía a restringir el acceso, sino a ampliarlo, podría tomarse en consideración para formular alguna sugerencia orientada a la mejor articulación del Proyecto. La referida Directiva ha sido incorporada a nuestro Ordenamiento interno a través del Real Decreto 472/2021, de 29 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones.

34.- Ni el Proyecto ni la MAIN mencionan dicha normativa en su cuerpo principal, sino únicamente en el Anexo II en dos de las alegaciones realizadas a la misma en el trámite de audiencia e información pública.

35.- Asimismo, es preciso señalar que Real Decreto 472/2021, de 29 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones, en su apartado 4, letra k) del artículo 7 rubricado



como “[P]roporcionalidad”, establece que “[a] A efectos del apartado 2.f), las autoridades competentes para la regulación evaluarán el efecto probable de las disposiciones nuevas o modificadas en combinación con uno o más requisitos, teniendo en cuenta que dichos efectos pueden ser tanto positivos como negativos, y en especial los siguientes...k) Requisitos en cuanto a tarifas fijas mínimas o máximas.”

36.- El en informe de este Consejo sobre el proyecto del Real Decreto por el que se aprueba el arancel de los derechos de los procuradores de los tribunales, aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en fecha 20 de abril de 2022, en relación a esta cuestión se hizo constar lo siguiente:

«49.- Analizado el contenido del Proyecto, y para concluir estas consideraciones particulares, corresponde poner de manifiesto una cuestión no abordada en el texto objeto de informe ni en la MAIN que lo acompaña, al observarse la inexistencia de la realización de un análisis del impacto económico real que puede suponer la transformación del régimen arancelario de mínimos en un régimen arancelario de máximos, y ello, partiendo de que nos encontramos ante una transformación debida por así haberse previsto en la Ley 15/2021, de 23 de octubre que, como ya se ha dicho, ni tan siquiera se cita en el proyecto remitido.

50.- Este órgano constitucional, de acuerdo con sus competencias, y atendida la incidencia o posible afectación de la buena Administración de Justicia, entiende que, por más que la reforma proyectada venga impuesta por los requerimientos de la Comisión y por la Ley 15/2021 como norma legal habilitante -sobre la que, insistimos, el proyecto guarda silencio-, resulta necesario el estudio del referido impacto económico de la modificación arancelaria proyectada, incluido el impacto en la competencia de este nuevo régimen, dado que el sistema arancelario de la procura no ha sido objeto de reforma o actualización alguna desde el año 2003 (Real Decreto 1373/2003).

51.- En esta línea, como anteriormente se ha indicado, el preámbulo del proyecto no menciona ni cita el Real Decreto 472/2021, de 29 de junio, por el que se incorpora al Ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad, y ello a pesar de que su artículo 7.4.k) establece como uno de los elementos a considerar para evaluar si un cambio de régimen jurídico de una profesión puede implicar una restricción de acceso (en lugar de una pretendida ampliación) aquellos cambios que se refieran a “[r]equisitos en cuanto a tarifas fijas mínimas o máximas”. Puede concluirse, por tanto, que más allá de que el referido Real Decreto 472/2021 resulte aplicable -y que, por tanto, las modificaciones del régimen retributivo de la profesión deban llevarse a cabo conforme al criterio de proporcionalidad-, lo cierto es que ha de apreciarse la necesidad de la evaluación del impacto económico real



del régimen proyectado en tanto que puede incidir en el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, y en la medida en que, como se ha expuesto, el real decreto proyectado, llamado a desarrollar la Ley 15/2021, de continua referencia, en lo que al sistema arancelario de la Procura se refiere, no contempla su actualización, manteniendo los mismos valores desde el año 2003, lo que resultaba ya aconsejable habida cuenta del tiempo transcurrido desde que fueron fijados los aranceles actualmente vigentes, y de la evolución de la economía y del mercado de los servicios profesionales que ha tenido lugar desde entonces; la supresión de los aranceles mínimos y el establecimiento de aranceles máximos convierte su pendiente actualización en un elemento necesario del estudio de impacto económico que no se ha realizado».

37.- Para justificar la variación de los importes no se han considerado los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El impacto económico a que se refiere la MAIN no se apoya en una auditoría o estudio económico que justifique las afirmaciones contenidas en la misma. A pesar de todo, de las alegaciones incorporadas como Anexo I y Anexo II, recibidas en el trámite de consulta pública previa y en el trámite de audiencia e información pública, respectivamente, se aprecia un grado de consenso considerable con la norma proyectada.

38.- Por ello, siempre que se respeten las cuantías recogidas en el arancel, y que las previsiones presupuestarias del Ministerio de Hacienda y Función Pública no incidan en esta materia rebajando las cuantías previstas, este Consejo no considera relevante la ausencia de un estudio de impacto económico real; en otro caso, se sugiere al prelegislador que el impacto económico sea abordado por medio de un riguroso análisis a través de una auditoría que realice un examen crítico y sistemático que permita justificar las cuantías y porcentajes recogidos en la norma proyectada.

39.- El Proyecto menciona en su Exposición de Motivos que "[e]ste real decreto se adecuaba a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia". Sin embargo, se aprecia que esta mención es meramente nominal y formal, puesto que en la Exposición de motivos y en la MAIN no contiene razonamiento alguno debidamente fundado en datos objetivos y contrastables.

40.- Asimismo, se observa que en el arancel no se contempla una cláusula de actualización de las cuantías del arancel ante un eventual incremento de los precios al consumo. No se puede perder de vista que, nacida esta



profesión para proteger la igualdad de las partes en juicio, tiene como atribución única la representación procesal. Esta función de representación procesal, como cometido propio del procurador, aparece recogida con carácter general en el artículo 438 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, particularmente, en los artículos 3 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 118, 119, 277 y 652 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 18 de la Ley de Procedimiento Laboral y 33 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Desde el punto de vista corporativo, los procuradores se encuentran sometidos a su Estatuto General, aprobado por el Real Decreto 2046/1982, de 30 de julio. En este mismo sentido, el propio Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto la trascendencia de la intervención del procurador en el correcto desarrollo del proceso *«sin cuya colaboración no sólo se resentiría gravemente el normal funcionamiento del mismo, sino que resultarían de imposible cumplimiento las garantías de efectividad y defensa que impone la Constitución a la tutela judicial»* (STC 110/1993).

41.- Como igualmente se expuso en el informe al Proyecto del Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales, aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 24 de julio de 2002, a *«[l]os procuradores les vienen encomendadas funciones por las leyes de procedimiento antes citadas y en especial por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en cuya Exposición de Motivos se subraya el importante papel de los procuradores en el nuevo diseño de los actos de comunicación, permitiendo que a través de una óptima gestión se aminoren los retrasos en la tramitación. El carácter público de la representación procesal al asumir obligaciones frente al Tribunal, se manifiesta en el apoderamiento apud acta, en la representación pasiva, en el modo de proveer a garantizar la igualdad de las partes y el derecho de defensa, que ha llevado al Tribunal Constitucional (STC 42/1982, de 5 de julio y 71/1990, de 5 de abril) a poner de relieve el deber del órgano jurisdiccional de velar porque el justiciable goce de la conveniente asistencia técnica en el proceso no sólo para el mejor servicio de los derechos e intereses del defendido, sino para la propia actuación del Tribunal y, en segundo lugar, que el art. 24 CE exige promover la defensa mediante la contradicción y la igualdad de armas que puede quebrar cuando una de las partes utiliza los servicios de un profesional y la otra no»*.

42.- Por todo ello, y en aras a la protección y salvaguarda de las importantes funciones que le corresponde al procurador en el desarrollo del proceso, este Consejo sugiere al prelegislador la introducción de algún tipo de cláusula de actualización de las cuantías del arancel que permita a los profesionales que el ejercicio su función tenga la rentabilidad económica suficiente.



d) Consideraciones sobre el principio de legalidad

43.- En nuestro informe de 20 de abril de 2022 sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, que luego se materializó en el Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, se dijo lo siguiente:

«**23.-** Como se explica en el apartado IV de la Exposición de Motivos de la Ley 15/2021, de 23 de octubre, “el tercer eje de la reforma afecta al Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y específicamente busca fijar un máximo de 75.000 euros como cuantía global de los derechos devengados por una persona profesional de la procura en un mismo asunto, estableciendo, además, que el sistema arancelario de la procura no podrá fijar un límite mínimo. De esta forma, se da cumplida respuesta a las exigencias de la Comisión Europea en el procedimiento de infracción 2015/4062 sustituyendo el modelo vigente, que pivota sobre la existencia de aranceles mínimos obligatorios, por un sistema de aranceles máximos cuyo desarrollo y concreción formará parte del real decreto que, en su momento, habrá de reformar el actualmente vigente, Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales”. El anteproyecto menciona expresamente la reciente Ley 15/2021, tanto en su exposición de motivos como en la MAIN. Así, no puede desconocerse que la norma proyectada se enmarca dentro del desarrollo de la Ley 15/2021, a la que tanto la Exposición de Motivos como la MAIN deberían referirse de manera expresa.

24.- Es el artículo tercero de la citada Ley 15/2021 el que ha venido a modificar el apartado 1 de la disposición adicional única del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, en los siguientes términos:

“1. La cuantía global por derechos devengados por un procurador de los Tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 75.000 euros.

El sistema arancelario que rija los derechos de los procuradores no podrá fijar límites mínimos para las cantidades devengadas en relación con las distintas actuaciones profesionales realizadas.

Excepcionalmente, y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá superar el límite anteriormente señalado para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales efectivamente realizados por el procurador de manera extraordinaria.”



25.- El Real Decreto objeto de informe se enmarca, como se acaba de indicar, dentro del desarrollo de la Ley 15/2021, concretando y desarrollando la prohibición del carácter de mínimos de los aranceles, ya anticipado por la referida Ley, que derivaba a un desarrollo reglamentario posterior la modificación del arancel de la procura».

44.- La intención del prelegislador, a la vista de la norma proyectada que deroga el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, modificado por el Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, es seguir la estela de este último al buscar fijar un arancel de máximo de 75.000 euros como como cuantía global de los derechos devengados por una persona profesional de la procura en un mismo asunto, estableciendo, además, que el sistema arancelario de la procura no podrá fijar un límite mínimo, así como la obligatoriedad de presentar, por parte del procurador de los tribunales a su cliente, un presupuesto previo, en el que se hará constar, de forma expresa, si se hubiera ofrecido, en el arancel propuesto, una disminución respecto del arancel máximo previsto en la normativa. Ello con la voluntad, como indica la Exposición de Motivos del Proyecto, de informar a los usuarios de los servicios profesionales de los procuradores de los tribunales del nuevo sistema de libertad de aranceles establecido y de evitar la aplicación automatizada de los aranceles máximos previstos, al tiempo que se significa la relevancia de la negociación del precio de prestación del servicio entre el procurador de los tribunales y su cliente, en un entorno libre de competencia, sin perjuicio de la existencia de un arancel máximo que sirva de protección al consumidor.

45.- No obstante, no se puede perder de vista que el Proyecto regula el libre ejercicio de una profesión u oficio, que constitucionalmente tiene su acomodo en el artículo 38 CE (Capítulo II del Título I CE), el cual reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, así como que los poderes públicos protegen y garantizan su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Y es lo cierto que el Proyecto establece la obligatoriedad del presupuesto previo, que afecta a al ejercicio de este derecho y que no viene recogido en la Ley 15/2021, de 23 de octubre.

46.- En atención a lo expuesto, el artículo 53 apartado 1 CE, "[l]os derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el art. 161.1.a)".



47.- La STC 103/2018, de 4 de octubre establece que «[c]omo declara la STC 89/2017, de 4 de julio, FJ 14, el art. 38 CE establece "los límites dentro de los que necesariamente han de moverse los poderes constituidos al adoptar medidas que incidan sobre el sistema económico de nuestra sociedad. El mantenimiento de esos límites [...] está asegurado por una doble garantía, la de la reserva de ley y la que resulta de la atribución a cada derecho o libertad de un núcleo del que ni siquiera el legislador puede disponer, de un contenido esencial" (STC 37/1981, de 16 de noviembre, FJ 2). Lo anterior es compatible con la afirmación del Tribunal en el sentido de que "[e]l derecho a la libertad de empresa no es absoluto e incondicionado sino limitado por la regulación que, de las distintas actividades empresariales en concreto, puedan establecer los poderes públicos, limitaciones que han de venir establecidas por la ley, respetando, en todo caso, el contenido esencial del derecho" (STC 18/2011, de 3 de marzo, FJ 15, y 135/2012, de 19 de junio, FJ 5) y han de estar "derivadas de las reglas que disciplinen, proporcionada y razonablemente, el mercado" (entre otras SSTC 127/1994, de 5 de mayo, FJ 6; 109/2003, de 5 de junio, FJ 15, y 112/2006, de 5 de abril, FJ 8)". El derecho fundamental a la libertad de empresa se ejerce, por tanto, dentro de un marco general configurado por las reglas establecidas por el legislador. Del hecho de que los preceptos recurridos impongan determinadas obligaciones a los abogados que afectan al libre ejercicio de su actividad económica no cabe deducir sin más que tal afectación sea contraria a la CE, "pues el derecho a la libertad de empresa no garantiza que el legislador no pueda establecer medidas que incidan en este derecho. El derecho fundamental a la libertad de empresa reconocido en el artículo 38 CE supone la exigencia de que las regulaciones públicas que afectan, como el caso del precepto impugnado, al ejercicio de una actividad empresarial, sean adecuadas para promover un objetivo considerado constitucionalmente legítimo y que las limitaciones que tales regulaciones impongan sobre el libre ejercicio de una actividad económica no conlleven, debido a su intensidad, una privación del referido derecho" (STC 89/2017, de 4 de julio, FJ 14) (EDJ 2017/138145)».

48.- Consecuentemente, cabe dudar de la suficiencia del rango reglamentario para el establecimiento de la obligatoriedad de un presupuesto previo que no viene previsto en la Ley 15/2021, de 23 de octubre, en la medida que ello afecta de modo directo al libre ejercicio de una profesión u oficio (artículo 38 CE), atendiendo a la expuesta reserva de ley, y a la doctrina del Consejo de Estado que incide en la necesidad de preservar el sistema de fuentes (cfr. Informe de 14 de febrero de 2008).



49.- Cabe hacer otra observación para cerrar estas consideraciones generales, que puede facilitar el entendimiento del sentido y del contenido del texto proyectado que es objeto de informe. Y es que el mismo se formula en términos prácticamente idénticos a los formulados en el proyecto de reforma del Real Decreto 1373/2003 que fue elaborado en el año 2017, en el que, como ahora, se sustituían los aranceles mínimos por un arancel máximo y se establecía la obligación de la elaboración de un presupuesto que reflejase la eventual rebaja respecto de los aranceles máximos, todo ello en el marco legal que establecía el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, en el cual se fijaba, como cuantía global máxima de los derechos arancelarios, la suma de 300.000 €, después rebajada, como a continuación se verá, a 75.000 € por la Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. Esta propuesta de reforma, en términos análogos, como se acaba de decir, a los que ahora contiene el Proyecto sometido a informe, tuvo a la vista, sin duda, el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea, y respondía, ya entonces, a la necesidad de acomodar el sistema arancelario español a los requerimientos impuestos por el TFUE y por la propia Comisión Europea.

50.- Finalmente, hemos de decir que el Consejo General de Procuradores de España (CGPE) recurrió el Real Decreto 7/2022, de 3 de mayo, representando a todos los Colegios, sin perjuicio de que algunos de ellos también lo hayan recurrido, dando lugar al Recurso Ordinario 566/2022, pendiente de sentencia, habiéndose dictado por el Tribunal Supremo Auto de fecha 27 de octubre de 2022 por el que se deniegan las medidas cautelares solicitadas, confirmado por Auto de fecha 30 de noviembre de 2022.

e) Análisis de alternativas

51.- Expone la MAIN que «[n]o se consideran otras alternativas al proyecto de real decreto que se propone, considerando que resulta preciso abordar la materia mediante un real decreto en cumplimiento de disposición final primera de la Ley 15/2021, de 23 de octubre, y además, atendiendo a que el arancel actualmente vigente fue aprobado mediante el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, y modificado por Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo». Se ha valorado la modificación del actual Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, pero se ha descartado y se ha optado por su



derogación, a la vista de que las modificaciones afectan a buena parte del contenido del arancel previo, por razones de seguridad jurídica y para contribuir tanto a un mejor conocimiento de la actuación de los procuradores por la ciudadanía, como a un mejor funcionamiento de la prestación de sus servicios profesionales, se ha optado por la elaboración de un nuevo real decreto que proceda a la aprobación del nuevo arancel de los procuradores de los tribunales y a la derogación del Real Decreto citado, lo que es valorado positivamente en orden a la coherencia de la regulación de la materia.

IV. CONSIDERACIONES PARTICULARES SOBRE EL ARTICULADO DEL PROYECTO

52.- El apartado uno del artículo 1 del texto proyectado se limita a establecer que “[e]l presente real decreto tiene como objeto la aprobación del arancel de los procuradores de los tribunales cuyo texto se incluye a continuación”, indicando el apartado segundo que “[d]icho arancel tendrá carácter de máximo, quedando prohibida la fijación de límites mínimos para las cantidades devengadas en relación con las distintas actuaciones profesionales y sobre la cuantía global que no podrá exceder de 75.000 €.

53.- La norma proyectada menciona la Ley 15/2021 en la Exposición de Motivos y en la MAIN. Así, la Exposición de Motivos se inicia con su alusión expresa, al referir que *«[m]ediante el Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales se ha dado cumplimiento a lo previsto en el apartado 2 de la disposición final primera de la Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones»*. Continúa su referencia indicando que *«[a]sí, el real decreto atiende a la necesidad de dar cumplimiento al mandato contenido en la Ley 15/2021, de 23 de octubre, de aprobar un real decreto por el que se modifique el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, siendo la regulación prevista eficaz y proporcionada en el cumplimiento de este propósito»*; y finaliza su alusión al recoger que *«[m]ediante el presente real decreto, se da cumplimiento a la disposición final primera de la Ley 15/2021, de 23 de octubre, que mandata al Gobierno a que, a propuesta del Ministerio de*



Justicia, apruebe, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de dicha ley, un real decreto por el que se modifique el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. »

54.- El Proyecto de Real Decreto objeto de informe se enmarca, como se acaba de indicar, dentro del desarrollo de la Ley 15/2021, concretando y desarrollando la prohibición del carácter de mínimos de los aranceles, estableciendo un límite máximo de 75.000 €, ya anticipado por la referida Ley, que derivaba a un desarrollo reglamentario posterior la modificación del arancel de la procura.

55.- Por ello, a la vista de la redacción del artículo citado, en este punto se acomoda a las exigencias de la Comisión, al compromiso asumido por el Gobierno y a la configuración plasmada en la reciente Ley 15/2021, cuya Exposición de Motivos ya explicita que opta por un sistema de aranceles máximos sin que se puedan fijar límites mínimos. El precepto citado, por tanto, se mueve dentro del principio de jerarquía normativa.

56.- Al respecto, como anteriormente se ha avanzado, por tratarse de consideraciones relativas a preceptos proyectados de idéntico tenor a los recogidos en el texto que ahora ocupa, y por tanto plenamente trasladables o aplicables al Proyecto que se informa, ha de traerse nuevamente a colación lo indicado por este órgano constitucional en el Informe de 31 de enero de 2019 al Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/2006, en el que, en relación con la modificación del apartado 1 de la disposición adicional única del Real Decreto-Ley 5/2010, que preveía el establecimiento del límite de 75.000 euros, se puso de manifiesto lo siguiente:

«45. Teniendo en cuenta que la modificación de la norma se ha referido exclusivamente al importe, nada tiene que oponer el Consejo: siempre y cuando la reforma acabe estableciendo realmente un sistema de precios libres en el que el importe global señalado sea un máximo, nada habría que objetar en cuanto que entendemos que no implica ninguna restricción a la competencia y se justifica en el establecimiento de un límite en beneficio del consumidor, tanto más cuanto que ese límite produciría también su efecto respecto de la condena en costas de terceros que nada habrían contratado con el procurador correspondiente.

46. Por otro lado, que el importe sea de 75.000 €, u otro superior o inferior, es una valoración económica frente a la que el Consejo, atendida su función, nada tiene que objetar en cuanto que es un importe que, por sí, no refleja ningún tipo de irracionalidad o desproporción.



47. Sí conviene poner de manifiesto, sin embargo, no una objeción, pero sí una advertencia de tipo técnico: la referencia del precepto a un «límite global» por «asunto», ha sido interpretada por la Sala Primera y la Sala Tercera del Tribunal Supremo –autos de 15 de marzo de 2017, ECLI:ES:TS:2017:2259, y de 10 de mayo de 2018, ECLI:ES:TS:5055A- en el sentido de que por «asunto» cabe entender «proceso», esto es, con todas sus instancias e incluyendo los recursos ordinarios y extraordinarios, de manera que el importe global comprende el máximo que puede llegar a facturarse por un procurador –a cliente o en costas- considerando la suma de los importes de todas las instancias.

48. En la medida en que esta jurisprudencia cabe considerarla conocida por el prelegislador y que ninguna previsión en contrario se ha incorporado al anteproyecto, cabe interpretar también que ese es el preciso sentido que se ha querido atribuir a la norma. En otro caso, esto es, si la intención del prelegislador es diferente, tendría que indicarlo expresamente, y ello en el bien entendido de que este Consejo nada tiene que oponer ni objetar a que el sentido de la norma sea precisamente el que deriva de la jurisprudencia que se ha enunciado».

57.- La Ley 15/2021, al modificar el apartado 1 de la disposición adicional única del Real Decreto-ley 5/2010, además de fijar un máximo de 75.000 euros como cuantía global de los derechos devengados por una persona profesional de la procura en un mismo asunto, ha venido a establecer que el sistema arancelario de la procura no podrá fijar un límite mínimo, explicando el apartado IV de la Exposición de Motivos de la Ley 15/2021, de 23 de octubre, que la finalidad de ambas modificaciones es atender los requerimientos de la Comisión Europea en el procedimiento de infracción 2015/4062 «*[s]ustituyendo el modelo vigente, que pivota sobre la existencia de aranceles mínimos obligatorios, por un sistema de aranceles máximos cuyo desarrollo y concreción formará parte del real decreto que, en su momento, habrá de reformar el actualmente vigente, Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales*».

58.- En base a ello ha de entenderse, como más arriba se ha expuesto, que la norma proyectada se acomoda a la Ley habilitante, toda vez que la cuantía global máxima de 75.000 euros recogida en aquella permanece inalterada, limitándose la norma reglamentaria proyectada a desarrollar la prohibición de la existencia de aranceles mínimos obligatorios y a sustituirlo por un sistema de aranceles máximos, como preveía la Ley 15/2021.

59.- Debe incidirse en que el establecimiento de una cuantía global máxima no es incompatible con que el real decreto proyectado atribuya a los aranceles que incorpora el carácter de máximos. En este sentido, el Tribunal Supremo



en su sentencia 37/2020 de 22 de enero de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:162), con cita de la STC 180/2013, de 23 de octubre de 2013, y de la STJUE Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 8 de diciembre de 2016, Eurosaneamientos SL y otros contra ArcelorMittal Zaragoza, S.A., y Francesc de Bolós Pi contra Urbaser, S.A (ECLI:EU:C:2016:932), en relación a la posibilidad de eludir la aplicación automática del arancel de los derechos de los procuradores, no considera ajustado a derecho el rechazo de la doctrina del principio de proporcionalidad para limitar los derechos de los procuradores, apartándose de los aranceles fijados reglamentariamente, lo que comporta, en definitiva, una alteración del sistema de retribución de tales profesionales.

60.- La atribución de este carácter de máximos, que constituye el contrapunto de la supresión del carácter de mínimos predicable de los aranceles, supone sustraer de la esfera de disposición del procurador, en el ámbito de la relación surgida del mandato representativo, la posibilidad de convenir aranceles superiores a los fijados con carácter general en atención a la cuantía del procedimiento, y específicamente respecto de las diferentes y diversas actuaciones procesales. De este modo, la cuantía global máxima, fijada ahora en 75.000 euros, se superpondrá al arancel establecido por razón de la cuantía del procedimiento y de las actuaciones procesales desarrolladas, operando como un límite o techo máximo cuando los derechos arancelarios que, también con carácter de máximo, resulten de la aplicación de las normas del régimen arancelario que incorpora el texto proyectado sean superiores a dicha cuantía global máxima.

61.- El artículo 2 del texto proyectado se refiere al ámbito de aplicación, que se extiende, a tenor del apartado primero, a la regulación de los "[d]erechos devengados por los procuradores en las actuaciones profesionales seguidas en toda clase de asuntos judiciales, así como los seguidos ante los órganos no jurisdiccionales y ante las Administraciones públicas, y quedan excluidos los que correspondan al procurador por los demás trabajos y gestiones que practique en función de lo dispuesto en los artículos 1.709 y 1.544 del Código Civil, y demás normas de aplicación." Asimismo, añade el apartado segundo que quedan excluido del ámbito de aplicación la retribución de los procuradores por su intervención o participación, en cualquier forma, en procedimientos de mediación, arbitraje u otros similares, así como por las gestiones extraprocesales, práctica de actos de comunicación judicial y demás gestiones derivadas del contrato de mandato, que acordará con su cliente o representado.

62.- La redacción del actual artículo 3 (percepciones no arancelarias) del Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, difiere ligeramente, pues



únicamente se limita a decir que "[e]ste arancel regula los derechos devengados por los procuradores en toda clase de asuntos judiciales y ante las Administraciones públicas, y quedan excluidos los que correspondan al procurador por los demás trabajos y gestiones que practique en función de lo dispuesto en los arts. 1.709 y 1.544 del Código Civil, y demás normas de aplicación".

63.- De la comparación de ambos preceptos, se observa que en la norma proyectada se mencionan expresamente los órganos no jurisdiccionales, a los que no se refiere la redacción actual del Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, y además, posteriormente, no solo se contempla la regulación del arancel ante el Tribunal Constitucional como órgano no jurisdiccional (artículo 83 de la norma proyectada) al que también se refiere el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre en sus artículos 80 y 81 (por lo que claramente incluye en su ámbito de aplicación a este órgano, sin perjuicio que de modo genérico no se mencionara en el artículo 3), sino también al Tribunal de Cuentas (artículo 84 de la norma proyectada); así, como dice la MAIN, en toda clase de recursos y procedimientos que se formulen ante el Tribunal de Cuentas, el procurador devengará sus derechos con aplicación de los principios retributivos que establece este arancel para los recursos de que conoce el Tribunal Supremo en materia civil.

64.- Además, en el Proyecto quedan excluidas expresamente la retribución de los procuradores por su intervención o participación, en cualquier forma, en procedimientos de mediación, arbitraje u otros similares, así como por las gestiones extraprocesales, práctica de actos de comunicación judicial y demás gestiones derivadas del contrato de mandato, que acordará con su cliente o representado. Esta previsión ha de conectarse con lo regulado en el Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, artículo 40 (derechos de los procuradores) considerándose que ha de entenderse incluida en la letra c) que contempla el derecho a los devengos "[q]ue procedan por las actuaciones de carácter extrajudicial, todo ello conforme a las reglas del mandato", en tanto que la remuneración por sus derechos arancelarios viene recogida en la letra b) como derecho a "[l]a remuneración justa y adecuada de sus servicios profesionales con arreglo al arancel"; en cuanto a la mención del mandato, resulta redundante, toda vez que el apartado primero del artículo 2 ya excluye de su ámbito de aplicación los derechos "[q]ue correspondan al procurador por los demás trabajos y gestiones que practique en función de lo dispuesto en los arts. 1.709 y 1.544 del Código Civil, y demás normas de aplicación", refiriéndose el primero al mandato y el segundo al arrendamiento de servicios.



65.- De lo anterior se desprende que es voluntad del prelegislador excluir del arancel cualquier tipo de actuación de carácter no jurisdiccional y que no tenga relación tampoco con las Administraciones Públicas ni con los órganos no jurisdiccionales expresamente mencionados (Tribunal Constitucional y Tribunal de Cuentas) que, en definitiva, están integrados en la estructura del Estado. El Tribunal Constitucional, en sus sentencias 46/2020, de 15 de junio de 2020, y 17/2021, de 15 de febrero de 2021, ha venido a decir que la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, configura la institución arbitral como un mecanismo heterónomo de resolución de conflictos al que es consustancial una mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por respeto a la autonomía de voluntad de las partes, que sustraen a la jurisdicción ordinaria por medio de un convenio arbitral la resolución de sus posibles controversias, defiriendo a los árbitros su conocimiento y solución, que desde entonces quedan vedados a la jurisdicción. En cuanto a la mediación, esta herramienta de resolución de conflictos consiste en la participación de un tercero neutral (el mediador) en la negociación, con el fin de facilitar la misma y alcanzar un acuerdo; y, respecto a la conciliación, consiste en un proceso de negociación con intervención de tercero sin capacidad de tomar una decisión vinculante, si bien parece considerarse que el tercero neutral asume una posición de convicción mayor, pudiendo presentar su propia solución u opción para resolver el conflicto. Consecuentemente, este órgano constitucional estima adecuada dicha exclusión a la vista del carácter no procesal ni institucional de estas formas de resolución de conflictos.

66.- El artículo 3 del texto objeto de informe, recoge la obligatoriedad de entregar un presupuesto previo, lo que ya está contemplado en la redacción del artículo 2 del Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, en virtud de la reforma operada por el Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo -que sustituyó la posibilidad de que los derechos de arancel sean objeto de un incremento o una disminución de hasta 12 puntos porcentuales cuando así lo acuerde expresamente el procurador con su representado para la determinación de los honorarios correspondientes a su actuación profesional-, lo que se redacta en los siguientes términos: "1. Los procuradores estarán obligados a informar a su cliente del coste estimado de su intervención y, cuando el cliente lo solicite, entregar un presupuesto previo. En dicho presupuesto constará expresamente, en su caso, la disminución ofrecida respecto del arancel máximo que corresponda, de conformidad con lo previsto en el artículo 1. 2. El procurador y su cliente gozan de libertad para pactar la retribución de los servicios profesionales prestados por el primero en cantidad inferior a lo previsto en el arancel. 3. La cuantía global por derechos



devengados por un procurador de los tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder del límite establecido en el arancel.”

67.- La Exposición de Motivos del Proyecto, y en términos similares la MAIN que lo acompaña, explican esta modificación señalando que *«[e]ste contexto de robustecimiento de la libre competencia entre los profesionales de la procura, se incorporó al Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, la obligatoriedad de presentar, por parte del procurador de los tribunales a su cliente, un presupuesto previo, en el que se hará constar, de forma expresa, si se hubiera ofrecido, en el arancel propuesto, una disminución respecto del arancel máximo previsto en la normativa. Ello con la voluntad de informar a los usuarios de los servicios profesionales de los procuradores de los tribunales del nuevo sistema de libertad de aranceles establecido y de evitar la aplicación automatizada de los aranceles máximos, al tiempo que se significa la relevancia de la negociación del precio de prestación del servicio entre el procurador de los tribunales y su cliente, en un entorno libre de competencia, sin perjuicio de la existencia de un arancel máximo que sirva de protección al consumidor y de garantía de la retribución adecuada del ejercicio de la profesión»* .

68.- La MAIN que acompañaba al Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/2006 explicaba, al abordar la reforma del arancel que *“[e]n línea con los requerimientos de la Comisión, y como desarrollo reglamentario de esta ley, se habilitará la posibilidad de negociar libremente por debajo de ese valor máximo y la obligatoriedad de elaboración de un presupuesto previo, lo que, sin duda redundará en un mayor beneficio para el consumidor y fomentará ostensiblemente la competencia.”*

69.- Al respecto, en nuestro Informe de 31 de enero de 2019 al referido Anteproyecto se recogió como conclusión que *“el Consejo entiende que es necesario y conveniente que la nueva norma incorpore la obligatoriedad del presupuesto u hoja de encargo para su inmediata exigibilidad”* indicando asimismo lo siguiente:

«38. [...] afirma la CNMC que la existencia de precios fijos publicados en una norma no es ni la única ni la mejor manera de satisfacer la necesaria publicidad del coste de los servicios al consumidor, y que eso es algo que se consigue mucho mejor con la simple exigencia de que los servicios se presupuesten con carácter previo a su ejecución –nota de encargo–, lo que garantiza una información efectiva y concreta en relación con cada encargo. [...]

40. En términos generales, lo que afirma el prelegislador es que pretende modificar el arancel para que los honorarios sean libremente negociados con el cliente, que contará –se dice en la MAIN– con la información suficiente



mediante la exigencia de un presupuesto previo y en todo caso con un importe global máximo por «asunto» de 75.000 €. [...]

57. Por último, y en lo que se refiere igualmente a diferir a futuro la obligatoriedad del presupuesto u hoja de encargo, en la medida en que este Consejo considera que el establecimiento de precios libres tendría que incorporarse a la norma de manera inmediata, entiende también que de la misma manera tendría que incorporarse a la norma de manera inmediata la obligatoriedad del presupuesto de los honorarios ya que, siendo negociables, sería de todo punto necesario que el consumidor tuviese un conocimiento cierto del coste de honorarios de los servicios que encomienda».

70.- Asimismo, se debe recordar, en palabras del Tribunal Supremo, que una práctica profesional transparente exige una información previa individualizada sobre los honorarios devengados durante las distintas fases procesales (Sentencia de la Sala de lo Civil de 24 de febrero de 2020 [ECLI:ES:TS:2020:504]).

71.- Ahora bien, con independencia de la obligación de la elaboración del presupuesto previo, que ha de ser expresivo de las diferentes partidas que integran los derechos arancelarios y, en su caso, de las deducciones ofertadas, se ha de traer a colación las consideraciones generales de este informe en cuanto que se debe poner en cuestión la suficiencia del rango reglamentario para el establecimiento de la obligatoriedad de un presupuesto previo que no viene previsto en la Ley 15/2021, de 23 de octubre, en la medida que ello afecta de modo directo al libre ejercicio de una profesión u oficio (artículo 38 CE), atendiendo a la expuesta reserva de ley, y a la doctrina del Consejo de Estado que incide en la necesidad de preservar el sistema de fuentes (cfr. Informe de 14 de febrero de 2008).

72.- En otro orden de cosas, es preciso poner de manifiesto que no existe previsión del prelegislador sobre qué efectos puede tener el presupuesto previo que dé lugar a una rebaja del arancel máximo en la tasación de costas regulada en el artículo 394 LEC en los casos en que haya habido condena en costas de la parte contraria y no sea aplicable el beneficio de justicia gratuita a la parte vencedora en costas, pues es bien sabido que el rédito originado por las costas es propio y específico de la parte beneficiada con las mismas, no del abogado y procurador. Estos profesionales tienen acción para cobrar sus honorarios y derechos de quien contrató sus servicios (STS 542/2005, de 28 de junio [ECLI:ES:TS:2005:4232], y STS 96/2006, de 14 de febrero de 2006 [ECLI:ES:TS:2006:218]). En efecto, el crédito dimanante de la condena en costas corresponde a la parte vencedora y no al procurador y letrado que le hayan representado y defendido en juicio, pues obviamente cualquier persona que necesite promover una demanda o defenderse frente a la



formulada contra él ha de concertar los servicios de los aludidos profesionales, mediante un contrato calificado como de arrendamiento de servicios y asume la obligación de satisfacer los derechos y honorarios devengados por su prestación, de cuyo importe puede resarcirse, si la sentencia recaída en el proceso ha condenado en costas a la parte contraria. Estas previsiones generales no impiden que las partes acreedora y deudora de un crédito de costas negocien o transijan sobre la persona que definitivamente deba recibir el pago de las cantidades que se hayan generado en este concepto, designando incluso que sean los propios abogados y procuradores de la parte vencedora, en cuyo caso estos últimos tienen derecho a cobrar directamente de la parte vencida en costas (STS 96/2006, de 14 de febrero de 2006 [ECLI:ES:TS:2006:218]).

73.- Todo ello a salvo de que el litigante sea beneficiario de la justicia gratuita, en el caso de condena en costas de la parte contraria, no ostenta crédito alguno dimanante del supuesto abono de honorarios y derechos de los profesionales que lo hayan representado y defendido en el proceso, sino que el letrado y el procurador son los auténticos titulares del derecho de crédito frente al condenado en costas, puesto que en estos casos no existe un verdadero contrato de arrendamiento de servicios concertado entre el litigante y los profesionales, cuya prestación es gratuita respecto de aquel y retribuida con fondos públicos, por lo que obviamente el vencedor en costas no ostenta ningún crédito frente a la parte contraria, dimanante del pago de unos honorarios y derechos que son gratuitos por disposición legal.

74.- En el orden contencioso-administrativo esta problemática está minimizada, puesto que el artículo 139.4 LJCA dispone expresamente: “[l]a imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima”, por lo que normalmente, del lado del principio de proporcionalidad, los Juzgados y Tribunales de lo contencioso-administrativo, al tiempo de condenar en costas, suelen limitar el importe de las mismas hasta una cifra máxima. Pues bien, a falta de previsión legal equivalente al artículo 139.4 LJCA, y con el objeto de evitar esta situación, se puede optar por tasar las costas según el arancel de máximos, o según lo realmente pagado. La primera opción tiene la ventaja de su simplicidad y la segunda es más justa, pero supone una mayor carga de trabajo para la Administración de Justicia. En cualquier caso, se sugiere al prelegislador que aclare la cuestión a efectos de evitar la inseguridad jurídica que de ello se pudiera derivar.

75.- Además, el apartado tercero expresamente establece que la cuantía global por derechos devengados por un procurador de los tribunales en un



mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder del límite establecido en el arancel, es decir, 75.000 €.

76.- La Disposición transitoria única, rubricada como “[R]égimen transitorio” dispone que “1. Las disposiciones previstas en el presente real decreto se aplicarán a todos los procedimientos que se inicien a partir de su entrada en vigor. 2. Para los procedimientos en tramitación a la entrada en vigor de este real decreto se aplicarán las cuantías del nuevo arancel exclusivamente para las actuaciones que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del mismo”.

77.- En nuestro informe de 20 de abril de 2022 sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, en relación al régimen transitorio previsto en el Anteproyecto, que luego se materializó en el Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, se dijo lo siguiente:

«39.- El artículo segundo del Real Decreto proyectado, sin rúbrica, dispone que:

“Se introduce en el proyecto de Real Decreto una disposición transitoria que queda redactada como sigue:

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.

Para los asuntos en tramitación a la entrada en vigor de este real decreto se aplicará la nueva naturaleza de arancel de máximos exclusivamente para los períodos o actuaciones que se inicien con posterioridad a ésta”.

40.- Sobre esta previsión, señala el último párrafo del Preámbulo del Proyecto que “[...] el presente real decreto establece un régimen transitorio para regular las relaciones procurador-cliente ante la entrada en vigor de la norma, determinando que la nueva naturaleza de arancel de máximos se aplicará exclusivamente para los períodos o actuaciones que se inicien con posterioridad a aquélla”, lo que se materializa en el transcrito artículo segundo.

41.- El referido régimen transitorio sigue el criterio que se recogió en la disposición transitoria única del Real Decreto 1373/2003 que, bajo la rúbrica de “[r]égimen transitorio de cuantías y de incrementos y disminuciones”, previó en su apartado 1 que “[p]ara los asuntos en tramitación a la entrada en vigor de este real decreto se aplicarán las cuantías del nuevo arancel exclusivamente para los períodos o actuaciones que se inicien con posterioridad a ésta”, añadiendo el apartado 2 que “[s]in perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, deberán respetarse y mantendrán sus



efectos los acuerdos ya alcanzados a la entrada en vigor de este real decreto entre los procuradores y sus representados sobre incrementos y disminuciones de los derechos de arancel con arreglo a lo dispuesto por el artículo 34 del Estatuto General de los procuradores de los Tribunales de España, aprobado por el Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre".

42.- Asimismo, ha de tenerse presente que bajo la rúbrica de "Arancel de derechos de los procuradores de los Tribunales", la disposición adicional única del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, tras la modificación operada por la Ley 15/2021, que únicamente ha afectado a apartado 1, señala que (el subrayado es nuestro):

"1. La cuantía global por derechos devengados por un procurador de los Tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 75.000 euros.

El sistema arancelario que rija los derechos de los procuradores no podrá fijar límites mínimos para las cantidades devengadas en relación con las distintas actuaciones profesionales realizadas.

Excepcionalmente, y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá superar el límite anteriormente señalado para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales efectivamente realizados por el procurador de manera extraordinaria.

2. En los procesos concursales la base para regular los derechos que se devenguen será el 60 por 100 del pasivo resultante de la lista definitiva de acreedores presentada por la administración concursal. Cuando el número de acreedores que figuren en la lista fuera superior a 300, la base de cálculo se elevará al 70 por 100 del pasivo.

3. Las reglas establecidas en los apartados anteriores serán de aplicación a todas las actuaciones o procedimientos en tramitación a la entrada en vigor del presente real decreto ley, incluidas las cantidades devengadas por actuaciones anteriores que no se hayan liquidado con carácter firme.»

43.- Expuesto lo anterior, se observa que el régimen transitorio previsto en la modificación proyectada, en tanto se refiere a los períodos o actuaciones que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del RD, se aparta del contenido de la disposición transitoria tercera de la Ley 15/2021, que bajo la rúbrica de "[m]odificación del régimen arancelario de los derechos de la procura", ha venido a regular los derechos arancelarios de los procuradores en los procedimientos que estuvieran tramitándose a la entrada en vigor de la Ley disponiendo que:

"1. La modificación del párrafo primero del apartado 1 de la disposición adicional única del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, dispuesta por el artículo tercero de esta Ley, será



de aplicación a todos los procedimientos que se inicien a partir de su entrada en vigor.

2. La prohibición de aranceles mínimos establecida en el párrafo segundo del apartado 1 de dicha disposición adicional regirá, por su parte, para los procedimientos que se inicien a partir de la entrada en vigor de la norma por la que se modifique el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.”

44.- De la transcrita disposición transitoria tercera se desprende con nitidez que el legislador ha querido regular el régimen transitorio de las dos modificaciones recogidas en la citada norma, tanto la relativa al establecimiento de la cuantía global máxima de 75.000 euros, de aplicación a todos los procedimientos iniciados a partir de la entrada en vigor de la Ley 15/2021, como la atinente a la prohibición de aranceles mínimos, cuya aplicación también prevé para los procedimientos que se inicien a partir de la entrada en vigor, no de la Ley, sino de la norma reglamentaria de modificación del Real Decreto 1373/2003 en virtud de la cual se concrete y desarrolle esta prohibición: por tanto, a partir de la entrada en vigor del Proyecto de Real Decreto objeto de informe.

45.- Asimismo, tras la disposición transitoria tercera de la Ley 15/2021, como norma de rango legal y posterior, ha de entenderse implícitamente derogada la previsión recogida en el apartado 3 de la disposición adicional única del Real Decreto-ley 5/2010, anteriormente transcrito, debiendo estar, únicamente, a los criterios transitorios delimitados por el legislador en la citada disposición transitoria tercera.

46.- Por tanto, el régimen transitorio aplicable al establecimiento de los aranceles máximos y, como correlato, a la supresión de los aranceles mínimos, es el que se deriva de la Ley 15/2021, el cual gravita en torno al momento del inicio del procedimiento y de la entrada en vigor de la norma proyectada. Y este mismo criterio ha de regir respecto de la previsión normativa que impone la obligación de presentar un presupuesto -y de reflejar en la hoja de encargo la disminución del arancel de máximos, se añade ahora- por razones de seguridad jurídica. Ciertamente es que el establecimiento de una retroacción de grado medio facilita la inmediatez de las medidas normativas orientadas a corregir las deficiencias del sistema arancelario de la procura sometido al contraste del Derecho de la Unión; pero razones basadas en la certidumbre y en la seguridad jurídica aconsejan, en cualquier caso, establecer la aplicabilidad de las previsiones normativas introducidas en el proyectado real decreto atendiendo al inicio del procedimiento, lo que permite, sin dificultad, contemplar en prospectiva el devengo de los derechos arancelarios, al menos desde una visión global inicial, y fijar en el preceptivo



presupuesto -y en la hoja de encargo- las deducciones ofertadas; lo que, por ende, se ajusta al marco legal que habilita el dictado de la norma proyectada”.

78.- Por tanto, a la vista del régimen de transitoriedad descrito en la norma proyectada y, en tanto en cuanto ésta deroga el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, el mismo es aplicable en todo su ámbito a todos los procedimientos que se inicien a partir de su entrada en vigor y, respecto de los procedimientos en tramitación a la entrada en vigor de este real decreto se aplicarán las cuantías del nuevo arancel exclusivamente para las actuaciones que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del mismo, lo que introduce una mayor claridad en el régimen transitorio vigente, no contraviene lo prevenido en la Disposición transitoria tercera de la Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, y es valorado positivamente por este órgano constitucional.

79.- La Disposición derogatoria única establece que quedan derogadas cuantas normas se opongan a lo establecido en este real decreto y, y en particular, el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.

80.- La Disposición final primera, relativa al “[t]ítulo competencial” residencia la norma proyectada en la competencia exclusiva sobre Administración de Justicia reconocida en el apartado 5 del artículo 149.1 de la Constitución, al igual que hiciera la disposición final primera e) del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal en relación con la disposición adicional única del citado RDL, referida al arancel de derechos de los procuradores de los Tribunales.

81.- Finalmente, la Disposición final segunda, relativa a la “[e]ntrada en vigor”, determina que el real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

V. CONSIDERACIONES PARTICULARES SOBRE EL ARTICULADO DEL ARANCEL

a) Título I. Disposiciones generales aplicables a todos los órdenes jurisdiccionales

82.- El Título I del arancel recoge las disposiciones generales aplicables a todos los órdenes jurisdiccionales, comprendiendo los artículos 1 a 17 del



arancel, por lo que tienen carácter supletorio en lo no previsto expresamente en estos casos para cada uno de los supuestos regulados en la norma proyectada, lo que además se prevé expresamente en el artículo 4 del Proyecto, al establecer que “[a]demás de las disposiciones del presente título, en defecto de las disposiciones previstas para los procesos penales, contencioso-administrativos, laborales y ante órganos no jurisdiccionales, serán de aplicación, a todos ellos, los preceptos del presente arancel para el orden jurisdiccional civil”. Ello es una novedad, puesto que en el actual arancel no contempla dichas disposiciones generales ni una norma general que recoja la supletoriedad como el artículo 4 mencionado, sin perjuicio de establecer la supletoriedad de las previsiones establecidas en el orden civil. Así, por ejemplo, en el orden penal el artículo 65 del Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, prevé que por la tasación de costas y liquidación de intereses en los procedimientos penales y demás incidencias, percibirá el procurador los mismos derechos que los regulados para los procedimientos civiles; en el orden contencioso administrativo, el artículo 68 establece que los procuradores de los tribunales, en toda clase de recursos o procesos contencioso-administrativos en los que intervengan ante los Juzgados de lo Contencioso o ante salas de esta jurisdicción, devengarán sus derechos con arreglo al art. 1, y el artículo 75 establece que en los procedimientos de ejecución de sentencia, sea provisional o definitiva, se aplicarán las normas de ejecución de la jurisdicción civil, así como para las tasaciones de costas, liquidaciones de intereses y sus incidencias, al igual que el artículo 76 en relación con los recursos y reclamaciones que se formulen ante cualquier órgano de las Administraciones Públicas, que se remite al artículo 1 del arancel, pero con una reducción del 50 por ciento; en el orden social, el artículo 78 también se refiere al artículo 1 del arancel para la intervención en la primera instancia -aplicando el 35%-, el artículo 79 se refiere a los derechos correspondientes a los recursos de casación y revisión en el orden civil, al igual que el artículo 80 para los procedimientos ante el Tribunal Constitucional. Todo ello, sin perjuicio de que en el Proyecto, asimismo, se hagan remisiones específicas a la regulación del orden civil del arancel, por lo que este órgano constitucional valora positivamente el contenido del Título I y, especialmente, el artículo 4 del mismo.

83.- El artículo 1, rubricado como “[d]evengo de los aranceles”, dispone que “[l]os derechos fijados en este arancel se entenderán totalmente devengados desde el momento de su inicio”, reproduciendo el artículo 91 del actual arancel recogido en el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre. Pues bien, en relación con el devengo de dichos derechos y, concretamente, el relativo a la partida de solicitud de la tasación (artículo 8 apartado 1 de la norma proyectada, correspondiente al artículo 5 apartado 1 del actual



arancel), el Auto 7994/2013 de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de fecha 11 de noviembre de 2015 (ECLI: ES:TS:2015:9248A) señala: «[A] este respecto conviene poner de manifiesto que si bien esta Sala con anterioridad no mantenía respecto del tema objeto de controversia un criterio pacífico, pues, en tanto unas resoluciones (AATS de 1 de junio de 2.010, Rec. 635/2006; 22 de junio de 2.010, Rec. 1522/2007; 2 de marzo de 2.011, Rec. 1377/2007) admitían la inclusión en la tasación de costas como derecho del Procurador la partida relativa a solicitud de la tasación (art. 5.1 del Arancel aprobado por RD 1373/2003, de 7 de noviembre), con base en que "la solicitud efectivamente se ha realizado por lo que procede su pago", otras mantenían como expone el ATS de 28 de enero de 2.010, Rec. 1178/2.004 que "en puridad no es una partida perteneciente a las costas causadas en el recurso de casación, es decir, aquellas impuestas en la correspondiente sentencia y para cobrar cuyo importe se ha interesado la tasación". Tal contradicción se resolvió por Auto de Pleno de 15 de abril de 2011, Rec. 53/2009 en el sentido de que "no procede la inclusión, porque dicha partida no forma parte de los conceptos del título del derecho de crédito de costas -resolución que condena al pago de las mismas-, pues se devenga con posterioridad, por lo que no corresponde pagarla a quien no ha sido condenado al respecto, todo ello sin perjuicio de que por corresponder al incidente de tasación puedan ser incluidas en las costas del mismo cuando la resolución que lo resuelve condena a su pago a la otra parte».

84.- En consecuencia, se sugiere al prelegislador que matice esta norma en relación a los derechos de arancel de la solicitud de tasación de costas.

85.- El artículo 2 apartado 1 del arancel fija los aranceles que se establecen para los procedimientos de cuantía determinada -salvo disposición específica al respecto- y, comparado con el actual arancel contenido en el artículo 1 del orden civil referido a los juicios declarativos y disposiciones comunes (que es supletorio, como hemos visto, en muchos supuestos), supone, en primer lugar una simplificación del número de tramos en cuantías determinadas de hasta 600.000 € (que se reducen de treinta y cuatro a nueve), y en segundo lugar un aumento del arancel en una media del 40%, llegando a percibir 74 € en cuantías de hasta 600 € (un único tramo), cuando antes eran 52,88 € para la cuantía de 601,01 € teniendo nueve tramos previos en los que la percepción era inferior, y llegando a los 2.157 € para el último tramo de hasta 600.000 € cuando ahora la percepción es de 1.540,39 €. Para el aumento porcentual se han tenido en cuenta, según se desprende de la MAIN en su análisis de impacto económico, los incrementos de los módulos y bases de compensación por el servicio de asistencia jurídica gratuita (general) en un 35%, y un 5% de formación personal.



86.- Este aumento porcentual igualmente se contempla para el apartado 2 del artículo 2, en concreto, para los derechos que se devengan por cada 6.010,12 € o fracción que exceda de 601.012,10 € por la que ahora se devengan 11,24 € y pasan a devengarse 14 euros, lo que supone que se ha incrementado en un 25%, que se justifican en la MAIN del mismo modo que el apartado primero, pero en este caso el primer concepto un 20% (resto procedimientos), valorándose igual la formación personal en un 5%.

87.- Los demás preceptos del arancel, siguen la misma línea de aumento a la expuesta para el artículo 2, valorándose, según la MAIN, básicamente los incrementos de los módulos y bases de compensación por el servicio de asistencia jurídica gratuita en sus diversos apartados correspondientes a cada procedimiento (general 35% y resto de procedimientos 5%) más un 5% de formación personal, sin perjuicio de que en otros artículos de la norma proyectada se tenga en cuenta además otros factores como el límite al alza del 12% y la asistencia a Juzgados y Tribunales en un 3% (artículo 7 relativo al auxilio judicial); también se valora un 5% de incremento por fotocopias (artículo 12 referente a las copias en papel, formato digital y grabaciones en soportes ópticos), un 20% por aplicaciones informáticas (artículo 13 referente a desglose de documentos, solicitud de testimonios y certificaciones), un 5% por el grado de responsabilidad asumido en el procedimiento (artículo 20 referente a las diligencias preliminares), un 10% por el mayor número de actuaciones en el procedimiento (artículo 22 letra a, referente a procesos matrimoniales y de familia), un 3% por comunicaciones (artículo 22 letra b, por las medidas provisionales), un 20% por la adecuación del arancel a las actividades realizadas en el procedimiento (artículo 22 apartado e, por la ejecución de obligaciones), un 5% en concepto de desplazamiento o un 50% por motivo de tratarse de un procedimiento de especial complejidad en relación al procedimiento vigente (artículo 46, actos de conciliación), tratándose estos preceptos del texto proyectado únicamente de ejemplos que se pueden encontrar a lo largo de todo el articulado.

88.- La ausencia de análisis de impacto económico que adolecía el Proyecto de Real Decreto por el se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, fue criticada por este órgano constitucional en informe aprobado por el Pleno de fecha 20 de abril de 2022. Por ello, este Consejo valora positivamente el análisis de impacto económico realizado en la MAIN de la norma informada y su reflejo en el articulado del Proyecto que, si bien no se apoya en una auditoría o estudio económico real, si ha despertado un considerable consenso en la profesión, como se desprende de las alegaciones incorporadas como Anexo I y Anexo II, recibidas en el trámite de consulta pública previa y en el trámite de audiencia e información pública, y siempre



que ello no se vea modificado por las previsiones del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

89.- También hay que tener presente que en algunos procedimientos se ha realizado un redondeo al alza o a la baja (+/- 5%) en cantidades pequeñas que, en la mayoría de los casos son al alza, pues de treinta y cinco redondeos, solo diez son a la baja.

90.- A ello hay que añadir que se han introducido nuevos procedimientos en los que se fija el arancel ex novo, por lo que no se valoran incrementos.

91.- En relación a este Título I, como novedad destaca el reconocimiento en el artículo 6 la multirepresentación en cuanto que un procurador puede comparecer en un procedimiento representando a dos o más poderdantes, bajo una misma dirección letrada o bajo una o diferentes direcciones letradas, en función de las cuales devengará una sola cuenta de derechos más un 10% adicional por cada uno de sus representados, o dos o más cuentas por cada uno de sus representados, respectivamente, lo que este Consejo valora positivamente.

92.- Asimismo, es preciso señalar que en los derechos devengados por auxilio judicial están regulados en el artículo 7, cuya redacción es la siguiente:

"1. Por la tramitación o intervención en exhortos, mandamientos, oficios y demás actos de comunicación con otros organismos públicos, entidades públicas, privadas o particulares, el procurador percibirá 20 euros por cada uno de ellos. En todo caso, serán de cuenta del cliente todos los gastos de salida que originen al procurador.

2. El procurador que deba acompañar a la comisión judicial, asistiendo por sí mismo o por otro procurador en quien haya delegado la intervención, en el cumplimiento de exhorto, despacho o diligencia, fuera del local del Juzgado en la misma o distinta población, devengará la cantidad de 35 euros".

93.- Los vigentes artículos 83 y 84 del Real Decreto 1373/2003, de 7 noviembre, tiene la siguiente redacción:

"Artículo 83. Auxilio judicial.

1. Por la tramitación o intervención en exhortos, mandamientos, oficios y demás actos de comunicación con otros organismos públicos, entidades públicas, privadas o particulares, el procurador percibirá:

a) En procesos de cuantía determinada:



Hasta euros	Euros
300,51	3,31
601,01	4,96
6.010,12	9,92
Más de 6.010,12	13,22

b) Si no se expresa o deduce la cuantía, o ésta fuera inestimable, se devengarán 13 euros.

2. El procurador que deba acompañar a la comisión judicial asistiendo por sí mismo o por otro procurador en quien haya delegado la intervención, en el cumplimiento de exhorto, despacho o diligencia, fuera del local del juzgado en la misma o distinta población, devengará la cantidad de 22,29 euros.

Artículo 84. Salidas del municipio.

Cuando el procurador tenga que salir fuera de la población de su residencia, pero dentro del partido judicial, por razón de cualquier asunto o diligencia o para el cumplimiento de exhortos, oficios o mandamientos, devengará 14,86 euros, percepción compatible con sus derechos en el asunto. En todo caso, serán de cuenta del cliente todos los gastos de salida que originen al procurador.”

94.- Lo primero que llama la atención es que en la redacción proyectada ya no existen tramos por cuantías (artículo 83 del Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre), sino que siempre el procurador va a devengar 20 euros por cada una de las tramitaciones o intervención en exhortos, mandamientos, oficios y demás actos de comunicación con otros organismos públicos, entidades públicas, privadas o particulares, salvo si debe acompañar a la comisión judicial fuera del local del Juzgado en la misma o distinta población, que dará lugar a un devengo de 35 euros. Pero además, en la regulación actual se establece que los derechos por salida del municipio son compatibles con sus derechos en el asunto, lo que no se recoge en la norma proyectada, y, en el caso de las salidas en general, serán por cuenta del cliente todos los gastos de salida que originen al procurador, previsión ésta que en el Proyecto se contempla de modo general para todas las salidas y que no corresponde más que al contrato de mandato que liga a ambas partes en virtud del artículo 1709 del Código Civil, por lo que se considera acertada la redacción en este punto.

95.- Lo más relevante es que con la nueva redacción el procurador va a generar derechos por cada una de las actuaciones de auxilio judicial que realice, lo que no es así en la norma actual, habiendo incluso algunas



resoluciones de Audiencias Provinciales que entendían que era una única partida, independientemente del número de actuaciones de auxilio realizadas por el procurador en un procedimiento.

96.- Finalmente, otra novedad a destacar está recogida en el artículo 12 que bajo la rúbrica “[c]opias en soporte papel, formato digital y grabaciones en soportes ópticos”, incluye un nuevo apartado 2 para el supuesto de grabación en soportes ópticos o en formato digital, tratándose de una nueva partida incluida en el arancel relacionada con el proceso de digitalización de la Administración de Justicia.

b) Título II. Orden Civil

97.- Este título comprende seis capítulos, rubricados como “[b]ase de cálculo. Determinación de la cuantía”, “[p]rocesos especiales”, “[p]rocedimientos concursales”, “[e]jecución y medidas cautelares”, “[a]ctos de conciliación, jurisdicción voluntaria y registro civil”, y “[r]ecursos”. La MAIN explica, en relación al Capítulo I, que *«En el título II referido al orden civil, se introducen modificaciones en su capítulo I dedicado a las disposiciones comunes y a juicios declarativos, así, el artículo 18 se dedica a la base de cálculo y determinación de la cuantía en los juicios declarativos con una remisión expresa a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, pero integrando distintas especialidades que se han plasmado en el nuevo arancel pudiendo destacarse los procesos en materia de desahucios y precario»*.

98.- En relación a los procesos por desahucio por falta de pago, actualmente tienen una norma específica que regula su cuantía, que en principio afecta a todo el procedimiento, tanto la fase declarativa como la ejecución, y viene determinada en el art. 2 letra f) del vigente arancel, que supone que se devenguen la mitad de los derechos establecidos en este artículo, con un mínimo de percepción de 30 euros. Esta especialidad se modula en la norma proyectada, por cuanto el Proyecto únicamente se refiere en el artículo 18 letra i) a los supuestos de enervación en los juicios de desahucio, sin especificar si son por falta de pago o por precario, en los que se devengarán el 50% los derechos que resulten de aplicar los artículos 2 y 3, de modo que, respecto de los demás supuestos afectantes a los juicios por desahucio, incluido el precario, se sigue la regla general.

99.- No se contiene en la norma proyectada ninguna especialidad relativa a los juicios por precario, sea rústico o urbano, en los que se percibe actualmente desde el momento de la presentación de la demanda o la contestación a esta, la suma de 130 euros (artículo 2 letra g del vigente arancel).



100.- Otra novedad es que se suprime la especialidad prevista para los procesos regulados en la legislación sobre arrendamientos rústicos y urbanos en los que se aplica el artículo 1 del vigente arancel, salvo en el caso de los arrendamientos rústicos donde se aplica una reducción del 20%, todo ello según la letra d) del artículo 2 del vigente arancel; también se suprime la especialidad prevista actualmente para los procesos sobre arrendamientos sujetos a la legislación especial de arrendamientos rústicos y urbanos, salvo que tengan por objeto la reclamación de cantidades (en que se estará al importe de las reclamadas), y en los cuales la cuantía será el importe de la renta anual multiplicado por tres, según letra e) del actual arancel. A la vista de la norma proyectada y, al no existir previsión específica al respecto, se aplica la norma general.

101.- Del mismo modo, ninguna referencia realiza el Proyecto al proceso por retracto mencionado ahora en la letra g) del artículo 2 del vigente arancel.

102.- Debe mencionarse, por otro lado, que en la norma proyectada se distinguen los supuestos de inadmisión de la demanda o desistimiento sin haber dado lugar a tramitación alguna, recogidos en la letra g) del artículo 18 de la norma proyectada, de los supuestos de desistimiento, renuncia o transacción, una vez admitida la demanda, recogidos en la letra h) del artículo 18, previsión que no contiene el actual arancel que en su artículo 2 letras i) y j) no distingue si ha habido tramitación posterior o no, lo que supone una mayor precisión y se justifica en atención a la distinta actividad del procurador.

103.- En otro orden de cosas, como novedad, en la letra m) del artículo 18 del Proyecto contempla los derechos del procurador por la intervención en procedimientos de *exequatur*.

104.- Las anteriores previsiones por un lado redundan en una mayor claridad expositiva, y por otro suponen la adaptación del mismo a la práctica de los tribunales, por lo que es valorado positivamente por este Consejo.

105.- Por lo que se refiere al Capítulo II rubricado como “[p]rocesos especiales”, destaca la regulación de los procesos sobre medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad, filiación y menores; así, expone la MAIN que *«[r]especto a las personas con discapacidad, filiación y menores, se ha procedido a modificar el precepto arancelario, en atención a los nuevos procesos sobre provisión de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad en sustitución de los procedimientos de incapacitación, así como el resto de procedimientos introducidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, en materia de protección de menores; y en materia de Registro Civil»*, todo lo



cual se estima adecuado a la vista de las modificaciones legislativas habidas en la materia, en especial la realizada por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, por Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, así como por la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

106.- De igual modo se ha procedido respecto al artículo 22 dedicado a los procesos matrimoniales y de familia para incluir los procesos no matrimoniales de forma homogénea, todo ello teniendo en cuenta que en artículo 7 del vigente arancel, letra c), se refiere a los procesos matrimoniales contenciosos, en tanto que ahora en el artículo equivalente de la norma proyectada (artículo 22) la letra c) se rubrica como “[p]rocesos de familia contenciosos, matrimoniales y no matrimoniales”, por lo que su número 2 relativo a la petición de alimentos, pensión compensatoria, o litis expensas, se aplican a ambas situaciones familiares (matrimoniales y no matrimoniales), y en la letra d) no se hacen distinciones entre la modificación de medidas en general y la relativa a los progenitores no cónyuges, lo que sí efectúa la letra d) del artículo 7 del vigente arancel.

107.- En este sentido se manifiestan claramente las SSTC 19/2012, de 15 de febrero de 2012, y 198/2012, de 6 de noviembre de 2012, que vienen a decir que la familia es una institución social y en cuanto tal evoluciona con los cambios de todo tipo que afectan a la sociedad. De la regulación constitucional no puede desprenderse que acoja una única modalidad de familia y que esta tenga su base solo en el matrimonio, por lo que este órgano constitucional entiende que la modificación propuesta por el prelegislador en la regulación de la norma proyectada respecto del arancel de los procuradores es adecuada.

108.- Otra adaptación necesaria del arancel de acuerdo con la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Civil afecta a la división judicial de patrimonios, por lo que se ha dado una nueva redacción al contenido del actual artículo 8 del arancel rubricado como “[d]ivisión judicial de patrimonios” que, con la misma rúbrica, pasa a ser el artículo 23 del Proyecto, suprimiendo las menciones a la “[t]estamentaria y en la adjudicación de bienes a que estén llamadas varias personas sin designación de nombres”, lo que supone una actualización a la regulación de este procedimiento a raíz de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que suprimió los artículos 959 a 1000 de la LEC, previsión que merece un juicio positivo.



109.- Referente al juicio cambiario, el Proyecto introduce un nuevo apartado 5 en el artículo 25, equivalente al artículo 10 del vigente arancel, en el que se incluye un incremento en los derechos cuando se inicia el procedimiento de apremio en la ejecución derivada del juicio cambiario, explicando la MAIN que *«[s]e trata de una modificación coherente con la regulación del proceso de ejecución y se aclaran los conceptos por los que se perciben los derechos previstos en el arancel por los procuradores»*. Así, no era inhabitual que en esos supuestos se minutase incluso por los derechos correspondientes a artículo 26.1 del vigente arancel, correspondiente al procedimiento de ejecución, aunque esta no se hubiese iniciado. En este sentido, la doctrina de las Audiencias Provinciales vino a establecer que el artículo 10 del Arancel es una norma especial que se aplica de forma preferente y no acumulada a la norma general del art. 26 del mismo arancel, sin perjuicio, claro está, del inicio de la vía de apremio que daría lugar a los derechos del párrafo segundo del art. 26.2 del arancel. La introducción de este párrafo 5 del nuevo artículo 25 del texto proyectado despeja cualquier duda, lo que merece una consideración adecuada por este Consejo.

110.- Aunque la MAIN no se refiera a esta cuestión, también cabe reseñar que, en la misma línea que para el juicio cambiario, en la regulación del procedimiento monitorio recogida en la norma proyectada en su artículo 24 se distingue, a efectos del arancel, la oposición de la ejecución, situación que no se recoge en el artículo 9 apartado 3 del vigente arancel, lo que dota de mayor precisión a la regulación, valorándose positivamente por este órgano constitucional.

111.- En cuanto a los juicios hipotecarios, regulados en el vigente arancel en el artículo 12 apartados 2 a 6, en la norma proyectada se contemplan en el artículo 26. Se observa que en este artículo 26 no se menciona la hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento, como sí lo hace el vigente arancel en el apartado 3 del artículo 12.

112.- El Código Civil regula la prenda y la hipoteca, junto a la anticresis, en el Tít. XV del Libro IV (artículos 1857 a 1886), relativo a las obligaciones y contratos. La regulación del Código se debe completar con la normativa sectorial básica prevista en la Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria -en adelante, LH- (Tít. V, artículos 104 y siguientes), y su reglamento aprobado por Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario -en adelante, RH- (Tít. V, art.215 s.); en la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de posesión, y su reglamento aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin



desplazamiento de posesión; en la Ley 48/1960, de 21 julio 1960, sobre Navegación Aérea (artículo 130 y siguientes); y en la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima (art.126 y siguientes). Asimismo, se debe tener presente la normativa foral y autonómica: Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra, cuyo Capítulo III del Título VII del Libro III (Ley 468 a Ley 474) lleva por rúbrica «De la prenda con desplazamiento, hipoteca, anticresis, derecho de retención y depósito en garantía». Y la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del Código civil de Cataluña, relativo a los derechos reales, incluyendo el de retención (artículos 569-3 a 569-11) en el Capítulo IX del Título VI (art.569-1 y siguientes).

113.- Consecuentemente, se sugiere al prelegislador se efectúe una redacción alternativa en la que se contemplen todas las situaciones descritas, bien sea enumerándolas, o bien mediante una cláusula residual como la recogida en el número 4 del artículo 12 del vigente arancel, que establece que "[e]n los demás procesos de la Ley Hipotecaria...se percibirán 27,86 euros y, si hubiere oposición, 55,73 euros".

114.- Cabe destacar, asimismo, que en la redacción de la norma proyectada se ha suprimido la referencia al expediente de dominio que viene recogido en el vigente arancel en el apartado 5 del artículo 12, en línea con la modificación del artículo 201 del Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria operada por Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. Al mismo tiempo, también se ha suprimido la referencia al procedimiento del artículo 313 del Reglamento Hipotecario relativo a la doble inmatriculación, todo ello debido a que la Ley 13/2015, de 24 de junio, introduce un nuevo régimen de inmatriculación de fincas, que deroga y sustituye totalmente el sistema anterior (por ejemplo el doble título público y el acta de notoriedad complementaria) con una regulación "ex novo" de los deslindes, excesos de cabida, declaraciones de obra nueva, reanudación de tracto, expedientes de dominio y de liberación de cargas y gravámenes, eliminando la intervención de órganos judiciales y atribuyendo competencias a Notarios y Registradores de la Propiedad. Lo anterior merece una consideración positiva por este órgano constitucional.

115.- Como novedad cabe destacar que se establecen especialidades en relación a los supuestos en que se deniegue la ejecución, de oposición a la ejecución, derechos que devenga al representante legal de la parte ejecutada, y derechos que se devengan en el caso de que el deudor abone el



importe de lo reclamado por principal, intereses y costas en el plazo legal desde que se produzca el requerimiento de pago, lo que se valora positivamente por este Consejo, pues introduce mayor precisión en la regulación del arancel acorde con la intervención del procurador en cada caso.

116.- Expone la MAIN que otra modificación de gran importancia afecta al artículo 29 dedicado al laudo arbitral, anulación, revisión y ejecución, pues era necesario que el arancel se ajustase a la actual regulación de la Ley 1/2000, de 7 de enero y a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. La redacción del vigente arancel, en su artículo 15, dispone:

"1. En el procedimiento de formalización judicial de arbitraje seguido conforme a lo dispuesto en la legislación vigente sobre arbitraje, cada procurador devengará la suma de 89,16 euros. 2. En los supuestos de auxilio jurisdiccional previstos en la legislación sobre arbitraje, los derechos ascenderán a 37,15 euros".

117.- Es preciso señalar que la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, entró en vigor el 26 de marzo de 2003, dejando sin efecto la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje. La situación actual del arbitraje en España encuentra su explicación en el desarrollo normativo de las últimas décadas. La base se configura sobre la Ley de Arbitraje de Derecho Privado, de 22 de diciembre de 1953, vigente hasta su derogación por la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje. La Ley de Arbitraje de Derecho Privado, de 22 de diciembre de 1953, partía de una concepción formalista del arbitraje, estableciendo un marco jurídico estructurado pero muy poco atractivo que retrasó el desarrollo e impulso del arbitraje como un método de resolución de conflictos. Esta ley fue sustituida por la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, que contribuyó a un cambio positivo en la percepción del arbitraje, permitiendo un modesto comienzo de la cultura arbitral en España. Es mediante la vigente Ley de Arbitraje 60/2003, de 23 de diciembre, con la que por fin el ordenamiento jurídico español se moderniza plenamente, adaptándose a las necesidades del arbitraje comercial internacional. Se basa en la Ley Modelo CNUDMI/UNCITRAL, que, como resalta la propia Exposición de Motivos de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, *«[t]iene en cuenta las exigencias de la uniformidad del derecho procesal arbitral y las necesidades de la práctica del arbitraje comercial internacional»*. La ley 60/2003 fue modificada por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado, que incluyó las siguientes modificaciones: i) Se suprimió la facultad de las partes para acordar que los laudos se emitan sin motivación; es decir, todos los laudos deben estar motivados, con la excepción de laudos por acuerdo; ii) Se reconoció de forma expresa los arbitrajes societarios; y, iii) Se estableció la posibilidad de que el



órgano arbitral pueda rectificar parcialmente el laudo una vez emitido cuando haya resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión por la partes (extra petita), o sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.

118.- La redacción del texto proyectado en su artículo 29, es como sigue:

"Laudo arbitral. Anulación, revisión y ejecución. 1. En el procedimiento de anulación del laudo arbitral percibirán los procuradores intervinientes los derechos previstos en los artículos 2 y 3 según corresponda. 2. Por la intervención de los procuradores ante el órgano jurisdiccional competente sobre las funciones de apoyo y control del arbitraje consistente en el nombramiento y remoción judicial de árbitros, la práctica de pruebas y la adopción judicial de medidas cautelares percibirá el procurador la cantidad de 75 euros por cada una de ellas. 3. Por la revisión del laudo arbitral conforme a lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil se devengarán los derechos previstos en los artículos 2 o 3, según corresponda. 4. Por la ejecución forzosa del laudo arbitral se devengarán los derechos previstos en este Arancel relativos a la ejecución".

119.- De lo anterior se infiere que el prelegislador regula más pormenorizadamente los derechos de arancel de los procuradores en relación al Arbitraje, lo que tiene sentido a la luz de la mayor expansión que ha ido adquiriendo el Arbitraje, siendo ello valorado positivamente por este Consejo.

120.- Expone la MAIN que *«[e]n el capítulo III del título II y en relación a los procedimientos concursales era necesario una revisión de los aranceles para adecuarlos a la actual regulación y a las funciones llevadas a cabo en los mismos por los profesionales de la procura, así se ha introducido una nueva escala para el devengo de los derechos»*. En este sentido, en el informe al Real Decreto por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, aprobado por el Pleno de fecha 9 de julio de 2003, este Consejo ya puso de manifiesto que *«[l]a Sección tercera del Capítulo primero se refiere a los juicios concursales regulando en los artículos 18 a 23 los derechos a devengar por la intervención en las suspensiones de pagos, quitas y esperas, quiebras y concursos de acreedores, las administraciones y las enajenaciones en procesos concursales. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Congreso de los Diputados en sesión plenaria de 19 de junio de 2003 ha aprobado la Ley Concursal y la Ley Orgánica para la reforma concursal por la que se modifica la LOPJ y el Código Penal, sería oportuno incluir en el texto del arancel los derechos que corresponderán a los procuradores por su intervención en el nuevo procedimiento concursal, evitando así la inevitable reforma del texto sometido a informe en un breve plazo de tiempo»*.



121.- De un examen de los preceptos afectantes a esta materia (artículos 32 a 37), como novedades destacables se aprecian las siguientes: i) se contempla expresamente el devengo de derechos arancelarios por motivo de comunicación de créditos a la administración concursal (artículo 35 de la norma proyectada); ii) se contempla expresamente el devengo de derechos arancelarios por motivo de la comunicación en representación del deudor por la apertura de negociaciones con los acreedores para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio o para alcanzar un acuerdo de refinanciación (artículo 38.1 de la norma proyectada); iii) se contempla expresamente el devengo de derechos arancelarios por motivo de la solicitud en representación del deudor de homologación del acuerdo de refinanciación que hubiera alcanzado con los acreedores (artículo 38.2 de la norma proyectada); y, iv) se contempla expresamente el devengo de derechos arancelarios por motivo de la impugnación de la homologación del acuerdo de refinanciación (artículo 38.3 de la norma proyectada).

122.- Pues bien, es preciso señalar que la Ley Concursal ha sido modificada con el objeto de transponer la Dir (UE) 1023/2019, DOUE de 26 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. Además, se han introducido otros ajustes no relacionados con la Directiva, que persiguen disponer de instrumentos ágiles y eficaces que mejoren los procedimientos de insolvencia para facilitar el mantenimiento de las empresas viables y la liquidación rápida y ordenada de las que no lo son. Dicha reforma se ha operado en virtud de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia), debiendo señalar que la entrada en vigor se produjo, con carácter general, el 26 de septiembre de 2022.

123.- Se pretende garantizar que las empresas viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a un procedimiento efectivo de reestructuración preventiva que les permita continuar su actividad, mediante el llamado plan de reestructuración. El plan de reestructuración es un instituto



preconcurso que sustituye a los acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pagos (Disposición adicional novena de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, habiendo sufrido una profunda reforma los artículos 583 a 684 de la Ley 1/2020, de 5 de mayo) y que favorece una reestructuración en un estadio más temprano que el de los actuales instrumentos: cuando se detectan indicios de probabilidad de insolvencia, frente a la anterior exigencia de que ésta sea inminente. Bajo ciertas condiciones, la ley permite la homologación del plan de reestructuración, aunque no haya sido aprobado por todas las clases de acreedores, de tal modo que el plan no solo arrastre a acreedores disidentes dentro de una clase que haya votado a favor (arrastre intra clase) sino también a clases enteras de acreedores disidentes (arrastre inter clase). Y como consecuencia de la reforma del derecho preconcursal, se suprime la propuesta anticipada de convenio (artículos 333 a 336 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal).

124.- A consecuencia de lo anterior, la última reforma concursal, igualmente, ha dejado sin efecto el artículo 529 relativo a la solicitud de concurso con presentación de propuesta anticipada de convenio.

125.- Por todo lo anterior, este Consejo, sin perjuicio de valorar positivamente la intención del prelegislador de adaptar el arancel de los procuradores a la actual regulación, sugiere que se modifique el artículo 38 en sus tres apartados para adaptarse a la vigente regulación en la materia.

126.- Por lo que respecta al capítulo IV dedicado a la ejecución y medidas cautelares, expone la MAIN que *«[e]l arancel se ha mejorado desde un punto de vista técnico para clarificar los derechos arancelarios que se derivan de la ejecución. Y se ha dado una nueva redacción al artículo 41 referido a la ejecución de obligaciones de hacer, no hacer y entrega de cosa»*. En este sentido, en el vigente arancel se contemplan en un solo artículo (artículo 26) rubricado como “[e]jecución”, tanto los derechos derivados de los procedimientos de ejecución regulados en este capítulo (apartado 1), como la solicitud de demanda ejecutiva y despacho de ejecución forzosa de resoluciones firmes, con la especialidad de que se inicie la vía de apremio hasta su finalización (apartado 2), la tramitación de la demanda ejecutiva de títulos no judiciales, con la especialidad de iniciación de la vía de apremio hasta su finalización, incluyendo el supuesto de que se trate de bienes hipotecados o pignorados y distinguiendo si hay oposición o si se deniega el despacho de ejecución (apartado 3), las ejecuciones que tengan por objeto la entrega de cosa mueble, entrega de cosa genérica o indeterminada, así como las obligaciones de hacer o no hacer, con la oposición a cualquiera de ellas (apartado 4), la ejecución provisional (apartado 5), la solicitud de



posesión de bienes muebles, petición y tramitación del lanzamiento, con la oposición en cualquiera de los casos (apartado 6), y las ejecuciones que tengan por objeto la indemnización de daños y perjuicios, frutos y rentas y liquidación de rentas, con la oposición, en su caso (apartado 7). También es reseñable que el artículo 26 bis se dedica a las administraciones de bienes como una medida cautelar que devenga aranceles específicos y distintos de cualquier otra regulada en el artículo 27, que contempla los derechos que devengan por cualquier medida cautelar, tanto por su solicitud (apartado 1), como por la formalización de la oposición a la medida (apartado 2).

127.- Por el contrario, en la norma proyectada se contempla en el Capítulo IV dedicado a la ejecución y medidas cautelares, un precepto para las disposiciones comunes (artículo 39), se entiende comunes tanto para la ejecución y las medidas cautelares, recogiendo normas generales sobre los procedimientos de ejecución regulados en este capítulo al objeto de determinar la cuantía (apartado 1), los derechos devengados en caso de oposición (apartado 2), los derechos devengados en caso de que se deniegue el despacho de ejecución (apartado 3), y extendiendo estas previsiones para los casos de sentencias y demás títulos ejecutivos extranjeros y laudos arbitrales internacionales reconocidos en España mediante la concesión del correspondiente *exequatur* (apartado 4). A continuación, se regula en el artículo 40 especialidades respecto de la ejecución de títulos judiciales y no judiciales, concretamente, respecto de la solicitud o demanda ejecutiva y despacho de la ejecución forzosa de resoluciones firmes y títulos no judiciales (apartado 1), los derechos que se devengan desde el inicio de la vía de apremio hasta su finalización (apartado 2), y los derechos que devenga el representante procesal de la parte demandada, sin perjuicio de los derechos devengados durante la ejecución (apartado 3). Seguidamente, el artículo 41 contempla especialidades respecto de las obligaciones de hacer, no hacer y entregar cosa, tanto en los supuestos de cumplimiento voluntario (apartado 1), como de incumplimiento (apartado 2), y oposición (apartado 3). El artículo 42 se dedica a la ejecución provisional, y el artículo 43 a la toma de posesión y lanzamiento, conteniendo este último precepto previsiones tanto en relación con la solicitud y toma de posesión de bienes inmuebles (apartado 1), la petición y práctica del lanzamiento (apartado 2), y la oposición a cualquiera de estas situaciones (apartado 3). El artículo 44 se dedica a la liquidación de daños y perjuicios, frutos y rentas, tanto en su tramitación (apartado 1), como en la oposición si existiese (apartado 2). Finalmente, el artículo 44 se contrae a las medidas cautelares, es decir, su solicitud (apartado 1), y también la formalización de la oposición a la medida (apartado 2).



128.- La sistemática utilizada por el Proyecto es mucho más clarificadora de los derechos que se devengan en este tipo de procedimientos, pues es de remarcar que en la regulación actual en un solo precepto (artículo 26) y, sin seguir ningún orden concreto, se regulan distintos procedimientos de ejecución y ejecución provisional con sus distintas especialidades, en tanto que la técnica de la norma proyectada de separar cada uno de los procedimientos y enmarcarlos con unas normas comunes, entiende este Consejo que es clarificadora y merece un juicio favorable.

129.- Otra modificación de importancia se refiere a los Actos de Conciliación, Jurisdicción Voluntaria y Registro Civil (capítulo V), pues, expone la MAIN, *«[e]ra necesario adaptar el sistema de aranceles a la actual regulación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria y simplificar la categorización. También se ha modificado el artículo 48, dedicado a las actuaciones ante el registro civil, en esta materia»*. Así, en el artículo 46 del Proyecto se recogen los derechos que se devengan por los actos de conciliación, en el artículo 47 se refiere a la Jurisdicción Voluntaria, y en el artículo 48 al Registro Civil, que vienen a sustituir los artículos 28 a 47 del vigente arancel, que ahora se refieren al acto de conciliación (artículo 28), declaración de herederos (artículo 29), informaciones para perpetua memoria y dispensa de ley y otras actuaciones (artículo 30), declaración de ausencia y fallecimiento (artículo 31), deslinde y amojonamiento (artículo 33), subastas voluntarias (artículo 34), expedientes de consignación (artículo 35), aceptación de herencia (artículo 36), depósito y reconocimiento de efectos (artículo 37), embargo y depósito del valor de letras de cambio (artículo 38), expedientes en materia de nombramiento de peritos y coadministradores (artículo 39), exhibición de libros y documentos (artículo 40), sustracción de documentos de crédito (artículo 41), otros procedimientos mercantiles (artículo 42), enajenación y apoderamiento de efectos comerciales (artículo 43), préstamo a la gruesa (artículo 44), petición de segunda copia (artículo 45), otros actos de Jurisdicción Voluntaria (artículo 46), y Registro Civil (artículo 48).

130.- Lo primero que llama la atención es que la regulación de los actos de Jurisdicción Voluntaria y el Registro Civil es prácticamente la misma, a salvo el incremento de los derechos de arancel. Y en segundo lugar es la sustitución de todos los artículos que en el vigente arancel disciplinan la Jurisdicción Voluntaria (artículos 29 a 47, ambos inclusive), por un solo artículo 47 en el texto proyectado, que simplifica la regulación y es conforme a la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, lo que merece un juicio positivo por parte de este órgano constitucional.



131.- El capítulo VI, “[R]ecursos”, comprende los artículos 49 a 53. Lo más destacado en la regulación en relación con la vigente, es que el artículo 49 del texto proyectado, referente a los recursos de reposición, revisión, petición de aclaración, subsanación y complemento, a diferencia del artículo 48 del vigente arancel, añade el recurso de revisión, lo que, a la vista de que el recurso de revisión fue introducido por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, considera este Consejo, es adecuado.

132.- Por otro lado, la MAIN indica que *«[e]n el capítulo VI, Recursos, el artículo 52 referido al recurso extraordinario de infracción procesal, recursos de casación foral y por infracción de normas, se ha introducido un nuevo concepto en el arancel referido a los casos de inadmisión del recurso»*.

133.- En primer lugar, cabe señalar la confusa redacción de la rúbrica del precepto que se refiere al “[r]ecurso extraordinario de infracción procesal, recursos de casación foral y por infracción de normas”, que, a mayor abundamiento, no tiene correspondencia con la regulación del precepto proyectado. La redacción del artículo 52 es la siguiente:

“1. Por la interposición del recurso extraordinario de infracción procesal y del recurso de casación, el procurador recurrente percibirá el 60 por ciento los derechos que le corresponde en esa instancia. Si se inadmite el recurso percibirá el 50 por ciento del porcentaje anterior.

2. Por la tramitación de los recursos a que hace referencia el apartado anterior, incluyendo la formalización de la oposición, ante el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo, en cada caso, cada procurador personado percibirá el 40 por ciento restante.

3. Si el recurso de casación no se admitiera en el supuesto previsto en el apartado 2.3 del artículo 483 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se devengará el 50 por ciento del primer periodo.”

134.- Ha sido tradicional en la regulación del recurso de casación la distinción de los dos motivos por los que procedía: por infracción de ley y por quebrantamiento de forma. Sin embargo, la vigente LEC escindió estos dos motivos, regulando en su lugar dos recursos distintos para ser conocidos cada uno de ellos por tribunales distintos: a) el recurso extraordinario por infracción procesal, que es competencia de los Tribunales Superiores de Justicia (artículo 468 LEC), si bien, con carácter transitorio, esta competencia viene atribuida por ahora a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Disposición final decimosexta LEC, que establece que en tanto no se confiera a los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para conocer del recurso extraordinario por infracción procesal, dicho recurso procederá, por



los motivos previstos en LEC art.469, respecto de las resoluciones que sean susceptibles de recurso de casación conforme a lo dispuesto en LEC art.477, por lo que los Tribunales Superiores de Justicia carecen de competencia por el momento y a pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la LEC); y b) el recurso de casación, que es competencia del Tribunal Supremo artículos (477 a 489 LEC).

135.- La competencia para conocer del recurso de casación se atribuye a la Sala Primera -de lo Civil- del Tribunal Supremo. No obstante, corresponde a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia cuando se impugnen resoluciones de los tribunales civiles con sede en la comunidad autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente, o junto a otros motivos, en infracción de las normas del Derecho civil foral o especial propio de la comunidad y cuando el correspondiente Estatuto de autonomía haya previsto esta atribución (artículos 478.1 LEC, 56.1 y 73.1.b LOPJ).

136.- Por último, respecto del recurso en interés de la ley, se trata de un remedio impugnatorio extraordinario y devolutivo que tiene por objeto contribuir a la fijación de la deseable unidad jurisprudencial en caso de que existan pronunciamientos firmes divergentes emanados de distintos Tribunales Superiores de Justicia (artículos 490 a 492 LEC).

137.- De la redacción de la rúbrica del precepto proyectado, y con relación al recurso de casación, se desprende que únicamente se refiere a los recursos de casación foral competencia de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando en los apartados 2 y 3 se refiere al recurso de casación sin más, por lo que es de suponer que se refiera a todos los tipos de recursos de casación, y no solo a los recursos de casación foral. Asimismo, es preciso señalar que no existe ningún recurso por infracción de normas, sino que éste es el único motivo del recurso de casación (artículo 477.1 LEC), a salvo que el prelegislador quiera referirse al recurso en interés de la ley; por ello, se sugiere al prelegislador que aclare la rúbrica del precepto en el sentido de suprimir la palabra "foral" para que pueda entenderse referida a todos los recursos de casación, y que aclare, asimismo, la previsión del recurso por infracción de normas, sustituyéndola, en su caso, en la rúbrica por el recurso en interés de la ley, todo ello con su referencia correspondiente en alguno de los apartados del precepto proyectado.

138.- Finalmente, a la hora de fijar los derechos que devengará el procurador en el recurso de casación, el precepto no establece la norma referencial concreta de los artículos 2 y/o 3 del arancel a la que han de vincularse dichos aranceles (bien el 60 por ciento de dichos derechos por la interposición y el 40 por ciento de dichos derechos por la tramitación), sino que solo menciona



“los derechos que le corresponde en esa instancia”. En consecuencia, se sugiere al prelegislador que supla dicha omisión.

c) Título III. Orden Penal, Juzgados de Menores y Vigilancia Penitenciaria

139.- El título III del arancel se dedica al orden penal, juzgados de menores y vigilancia penitenciaria. En referencia al Capítulo I (orden penal, artículos 55 a 66), expone la MAIN que *«[s]e ha modificado el arancel de los procuradores para adaptar los procedimientos a los actualmente regulados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, en relación a la tramitación completa en los juicios rápidos y juicios por delitos leves (artículo 56). Y era necesario integrar una nueva categoría a la que se dedica el artículo 57 la de procedimientos de especial complejidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando la fase de instrucción se prolongue durante más de 3 años, el número de intervinientes sea superior a 10, y la causa contenga más de mil folios. Por lo que se refiere a las ejecutorias penales y ejecución de los pronunciamientos sobre responsabilidad civil (artículo 65), se ha considerado adecuado distinguir la intervención del procurador en la fase de ejecutoria, cualquiera que sea el concepto en el que esté personado, con independencia de la ejecución de la acción civil y, por otra parte, su intervención en los procedimientos de ejecución de los pronunciamientos sobre responsabilidad civil, sea provisional o definitiva, a los que se aplicarán las normas de ejecución de la jurisdicción civil. En relación al ejercicio de la acción civil (artículo 66) en la forma determinada en el artículo 112 o 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se clarifican los derechos a percibir por el ejercicio de la acción civil en el proceso penal»*, por lo que, a la vista de las últimas reformas procesales operadas en la materia, en especial, por Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado, por Ley Orgánica 8/2002, de 24 de octubre, complementaria de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado, y por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, ello merece un juicio global positivo.

140.- No obstante lo anterior, es preciso poner de manifiesto que el artículo 61 de la norma proyectada dedicado a recursos, olvida regular los derechos devengables por el procurador en relación al recurso de súplica (artículo 211



LECRIM), por lo que se sugiere al prelegislador regule los derechos devengables por el procurador en este caso.

141.- Como novedad, en el Capítulo II dedicado a los “[p]rocedimientos de menores”, se ha mantenido la diferencia existente entre la primera y la segunda instancia, pero se ha introducido una referencia expresa a la intervención del procurador por la acción civil y la previsión se ha incorporado para los recursos de apelación de las resoluciones de dichos procedimientos (artículo 67), todo ello con el incremento arancelario correspondiente, lo que es valorado adecuadamente por este órgano constitucional por la mayor exactitud en la regulación.

142.- En cuanto al Capítulo III y referente a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, el artículo 68 mantiene prácticamente la misma regulación del artículo 67 del vigente arancel, con el incremento arancelario correspondiente.

d) Título IV. Orden Contencioso-administrativo y de las Administraciones Públicas

143.- El Título IV está rubricado como “[O]rden contencioso-administrativo y de las Administraciones Públicas”, refiriéndose el Capítulo I a la primera de las materias rubricadas y el Capítulo II a la segunda de ellas, exponiendo la MAIN que *«[p]or lo que se refiere al orden contencioso administrativo (capítulo I del título IV), se ha introducido un nuevo supuesto para el caso de que interpuesto el recurso contencioso-administrativo, la Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante, declarándose terminado el procedimiento y el archivo del recurso sin que se hubiese dictado sentencia, así, en este caso, el artículo 70.3 regula los derechos arancelarios que corresponderán al procurador. Por otra parte, en el artículo 73 relativo a los recursos contra resoluciones procesales y judiciales, se ha introducido junto a los recursos contra resoluciones procesales que ya estaban previstos en el arancel vigente, los recursos contra las resoluciones judiciales. Por lo que respecta al recurso de apelación contra sentencias, el nuevo artículo 74 dedicado a recursos contra sentencias y autos, distingue los supuestos de cuantía determinada de aquellos en los que fuese indeterminada en orden a la aplicación de la escala del artículo 2 o 3 y también es una novedad destacable la referencia al importe del arancel cuando se trate de un recurso de apelación contra autos. Y en el mismo sentido se regula para el caso de actuaciones ante las Administraciones Públicas en el artículo 77».*



144.- A ello hay que añadir que el artículo 74 de la norma proyectada, que regula los recursos contra las sentencias y autos, en su apartado 1 letra c) introduce una nueva categoría para el caso de que no se admitiese el recurso de casación, todo lo cual merece un juicio global positivo por la mayor precisión de la regulación del arancel en este orden jurisdiccional y en relación a la actividad de las Administraciones Públicas.

145.- No obstante lo anterior, se produce una “laguna” al no contemplarse, como sí se hace en el Orden Civil y Penal, la inadmisión del recurso de casación en la fase de admisibilidad del mismo (artículo 52.3 de la norma proyectada en el Orden Civil, y artículo 63 de la norma proyectada en el Orden Penal), como ha sido puesto de manifiesto por la reiterada y pacífica jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que opta por aplicar la regulación genérica del art. 69 de los aranceles que establece como derechos el 10% de los establecidos en el art. 73.2 del vigente arancel. Así, ATS, Contencioso, 14411/2010, de 30 de septiembre Contencioso sección 1 del 30 de septiembre de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:14411A).

146.- Por lo que se sugiere al prelegislador que supla dicha laguna mediante la previsión de una norma específica para el supuesto de inadmisión del recurso de casación.

e) Título V. Orden Social

147.- El Título V, referido al “[O]rden social” (artículos 78 a 81, en relación a actos de conciliación, procedimientos en el orden social, recursos y procedimientos de ejecución, respectivamente), continúa exponiendo la MAIN que *«[e]n cuanto a los procedimientos del orden social, ha sido necesaria su adaptación a los regulados actualmente por la Ley reguladora de la Jurisdicción Social»*. De un análisis de dichos preceptos, como novedades se desprende que en el primero de ellos se exige la intervención del procurador y no simplemente la personación como establece el artículo 77 del vigente arancel; en el segundo de ellos se introduce la categoría de procedimientos sobre prestaciones de la Seguridad Social en lugar de procedimientos sobre invalidez del apartado 1 del artículo 78 del vigente arancel, añadiendo que en el apartado 2 se menciona los procedimientos de tutela de los derechos fundamentales y las libertades públicas en lugar de los procedimientos de tutela de los derechos de libertad sindical del apartado 2 del artículo 78 del vigente arancel; y, además, en el artículo 81 se establece una categoría especial de devengo de derechos en los procedimientos de ejecución.

148.- Todo lo anterior, teniendo en cuenta la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, merece un juicio general positivo por la



mayor precisión de la regulación del arancel en este orden jurisdiccional social.

f) Título VI. Jurisdicción Militar

149.- -Expone, asimismo, la MAIN en relación al Capítulo VI, que, *«[c]omo novedad, pues no estaba previsto en el anterior arancel, se ha introducido un artículo, el 82 dedicado a los procedimientos ante la jurisdicción militar, para regular la intervención de los procuradores en los procedimientos previstos en la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar»*. Ello merece un juicio favorable, una vez más, por la precisión en la regulación de los distintos procedimientos.

g) Título VII. Actuaciones ante Órganos no jurisdiccionales

150.- El Título VII está referido a actuaciones ante órganos no jurisdiccionales. Pues bien, en el artículo 83 de la norma proyectada se ha incluido, junto a las actuaciones ante el Tribunal Constitucional y que ya están previstas en el vigente arancel (artículo 80), las actuaciones ante el Tribunal de Cuentas (artículo 84). Así, en toda clase de recursos y procedimientos que se formulen ante el Tribunal de Cuentas, el procurador devengará sus derechos con aplicación de los principios retributivos que establece este arancel para los recursos de que conoce el Tribunal Supremo en materia civil.

151.- En este sentido, la intención del prelegislador no es más que la que se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en esta materia aplica las normas arancelarias previstas para el Tribunal Supremo en el orden civil, como se desprende, entre otros, en el auto del Tribunal Supremo, contencioso, de 9 de abril de 2012 (ECLI: ES:TS:2012:8559), que literalmente declara que *«[e]n el caso que nos ocupa, queda documentalmente acreditado, mediante certificación de la Secretaria de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, que dicha Sala fijó la cuantía del procedimiento recurso en indeterminada. Así las cosas y teniendo en cuenta lo establecido en el art. 73.2.b) y la remisión que en dicho precepto se hace al art. 68.2.c) del Arancel de procuradores aprobado por Real Decreto 1373/2003 -en cuanto el procurador minutante formalizó la oposición al recurso- la cuantía a fijar como derechos del mismo será el 80% de 297,24 euros, en decir 237,79 euros»*; del mismo modo, el auto del Tribunal Supremo, contencioso, de 22 de abril de 2010 (ECLI: ES:TS:2010:5557A), declara que *«[c]omo se ha indicado, la tasación de costas impugnada procede de un Auto de inadmisión del recurso de casación y, al respecto, es de aplicación el artículo 69.1, tal y como ha apreciado la Secretaria Judicial al practicar la referida tasación. Así, el artículo 69.1º dispone que si el recurso*



no se admite o se desiste sin haber dado lugar a tramitación alguna, el Procurador devengará el 10 por ciento de los derechos que resulten de la aplicación del artículo 1º. Resulta, pues, plenamente aplicable al supuesto que nos ocupa el mencionado precepto, ya que se ha declarado la inadmisión del recurso de casación, y ello aunque antes de resolver sobre la inadmisibilidad se haya observado el trámite de alegaciones previsto en el artículo 93.3º de la Ley de la Jurisdicción».

152.- A la vista de la asunción de la doctrina jurisprudencial asentada y en aras de evitar lagunas legales, lo anterior es valorado positivamente por este Consejo.

153.- Finalmente, el artículo 85 del Proyecto regula los derechos arancelarios de los procuradores ante los Tribunales Eclesiásticos, de modo similar a como lo hace el artículo 81 del vigente arancel, a salvo del incremento correspondiente.

154.- A lo largo del articulado del arancel, existen muchas reglas en las que los derechos se determinan por remisión a los artículos 2 y/o 3, según corresponda, siguiéndose el criterio, en su caso, de otorgar un porcentaje concreto de las cuantías indicadas en la tabla del artículo 2 o de la cantidad del artículo 3. Así, en el orden civil, el artículo 18 letras d) -juicio ordinario-, e) -procesos declarativos-, f) -allanamiento- g) inadmisión o desistimiento sin tramitación alguna de la demanda-, h) - desistimiento, renuncia o transacción, una vez admitida la demanda-, i) - enervación en los juicios de desahucio -, y j) - procedimientos en los que el procurador se persone como acreedor posterior-; artículo 22 letra a), apartado 3 -liquidación del régimen económico matrimonial en los procesos familiares de mutuo acuerdo-, artículo 22 letra c) apartado 3 -intervención en la disolución del régimen de gananciales en los procesos de familia contenciosos, matrimoniales y no matrimoniales-, artículo 22 letra c) apartado 4 -liquidación del régimen económico matrimonial en los procesos de familia contenciosos, matrimoniales y no matrimoniales-, artículo 22 letra e) -solicitud de cumplimiento de obligaciones-; artículo 23 apartado 1 -procedimiento para división judicial de la herencia-; artículo 24 apartado 2 -cobro de lo reclamado en el procedimiento monitorio-; artículo 25 apartado 2 -denegación de la ejecución en el juicio cambiario-, artículo 25 apartado 3 -oposición en el juicio cambiario-, artículo 25 apartado 4 -en el caso de que el deudor atienda al requerimiento en el juicio cambiario-; artículo 26 apartado 1 -acciones hipotecarias ejercitadas conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y siguientes de la Ley Hipotecaria y en los de hipoteca naval-, artículo 26 apartado 2 -caso de que se deniegue la ejecución-, artículo 26 apartado 3 -oposición a la ejecución-, artículo 26 apartado 4 -derechos correspondientes



al procurador representante procesal de la parte ejecutada, artículo 26 apartado 5 -si el deudor abona el importe de lo reclamado por principal, intereses y costas en el plazo legal desde que se produzca el requerimiento de pago-; artículo 28 apartado 1 -procesos de impugnación de acuerdos sociales de las sociedades anónimas y demás sociedades mercantiles y cooperativas, y procesos de revisión de acuerdos de sociedades cooperativas-; artículo 32 -dentro de los procedimientos concursales, los procedimientos sobre concurso servirán de base para regular los derechos que se devenguen, salvo que específicamente se disponga otra cosa-; artículo 34 -percepción por secciones dentro de los procedimientos concursales-; artículo 35 apartado 1 -denegación de la admisión del concurso-, artículo 35 apartado 3 -derechos devengados por el procurador respecto de cada acreedor que represente en el concurso-, artículo 35 apartado 4 -procurador de la administración concursal y del concursado-; artículo 38 apartado 2 -solicitud en representación del deudor de homologación del acuerdo de refinanciación-; artículo 39 apartado 2 -en las disposiciones comunes de la ejecución y medidas cautelares, supuesto de oposición-, artículo 39 apartado 3 -denegación del despacho de ejecución en la ejecución y medidas cautelares, disposiciones comunes-; artículo 40 apartado 2 -por actuaciones desde el inicio de la vía de apremio hasta su finalización en la ejecución de títulos judiciales y no judiciales-, artículo 40 apartado 3 -derechos devengados por el representante legal de la parte ejecutada en la ejecución de títulos judiciales y no judiciales-; artículo 41 apartado 3 -derechos devengados por el procurador en caso de oposición a obligaciones de hacer, no hacer y entrega de cosa-; artículo 43 apartado 2 -petición y práctica de lanzamiento-, artículo 43 apartado 3 -oposición a la solicitud y toma de posesión de bienes muebles y al lanzamiento-; artículo 45 -oposición a las medidas cautelares-; artículo 47 apartado 1 -intervención en expedientes de jurisdicción voluntaria cuantía determinada-, artículo 47 apartado 2 -intervención en expedientes de jurisdicción voluntaria cuantía indeterminada o inestimable-; artículo 50 letra a) -interposición de la apelación, la oposición o impugnación de la resolución, y su posterior traslado ante el Juzgado de Primera Instancia-, artículo 50 letra b) -intervención del procurador ante la Audiencia Provincial en el trámite hasta sentencia, incluida la designación de domicilio o recepción de notificaciones-; artículo 52 apartado 1 -interposición del recurso extraordinario de infracción procesal y del recurso de casación-, artículo 52 apartado 2 -la tramitación de los recursos a que hace referencia el apartado anterior, incluyendo la formalización de la oposición, ante el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo-, artículo 42 apartado 3 -no admisión del recurso de casación-; artículo 64 -en el orden penal, caso de no admisión de recursos o que se declaren desiertos-; artículo 70 apartado 1 -en el orden



contencioso-administrativo, respecto de la inadmisión, caducidad, desistimiento del recurso, o reconocimiento en vía administrativa de las pretensiones objeto del recurso, caso de no admisión o desistimiento sin haber dado lugar a tramitación alguna- artículo 70 apartado 2 -si admitido el recurso, no se formalizara la demanda-, artículo 70 apartado 3 -si interpuesto recurso contencioso-administrativo la Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante, declarándose terminado el procedimiento y el archivo del recurso sin que se hubiese dictado sentencia-; artículo 71 apartado 2 -en el orden contencioso-administrativo, respecto de las medidas cautelares, si se formaliza oposición a la medida-; artículo 74 apartado 1, letra c) -en el orden contencioso-administrativo, respecto de los recursos contra sentencias y autos, si el recurso de casación no se admitiera-; artículo 77 - recursos y reclamaciones que se formulen ante cualquier órgano de las Administraciones públicas-; artículo 79 apartado 1 -en los procedimientos ante el orden social, intervención en la primera instancia-; artículo 80 apartado 2 -en el orden social, intervención en recursos de casación y revisión-.

155.- En relación a esta misma cuestión ya ha tenido este Consejo oportunidad de pronunciarse en un caso similar, concretamente en informe al Proyecto del Real Decreto por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, aprobado por el Pleno el 9 de julio de 2003, indicando que *«6.- Dado que en todas las reglas en las que los derechos se determinan por remisión al art. 1 se sigue el criterio, en su caso, de otorgar un porcentaje concreto de las cuantías indicadas en la correspondiente tabla, contribuye a crear confusión, aunque el resultado sea el mismo, el que en los artículos 8.1, 12.1 y 36.2 (división judicial de patrimonios, procedimientos del art. 41 de la Ley Hipotecaria y aceptación de la herencia por los acreedores) se fije la cuantía de los derechos a percibir reduciendo los indicados en el art. 1 en un 25%, en un 75% y en un 60% en vez de directamente atribuir un 75%, un 25% y un 40% respectivamente de los señalados en el citado art. 1.»* .

156.- Por ello, finalmente, entiende este órgano constitucional que los porcentajes señalados más arriba crean confusión, considerándose más adecuado fijar una cuantía de los derechos a percibir reduciendo los indicados en los artículos 2 y 3 de la norma proyectada en los porcentajes que procedan, por lo que se sugiere al prelegislador una redacción alternativa.



VI. CONCLUSIONES

PRIMERA.- El Proyecto informado deroga y pretende sustituir al Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, modificado por Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, señalando que esta reforma tuvo como objetivo acomodar el sistema de aranceles de los procuradores de los tribunales al Derecho de la Unión Europea, mediante la supresión los aranceles mínimos obligatorios, a la par que estableció un sistema de aranceles máximos (hasta 75.000€), dando cabida a la posibilidad de un pacto inferior, entre las partes, respecto a los aranceles, así como incorporó la obligatoriedad de presentar, por parte del procurador de los tribunales a su cliente, un presupuesto previo. El Proyecto informado incorpora dichas previsiones.

SEGUNDA.- Ha de entenderse, por tanto, que la norma proyectada se enmarca dentro del desarrollo de la Ley 15/2021, de 23 de octubre. En este sentido, el establecimiento de un carácter de máximo del arancel y la prohibición de los aranceles mínimos obligatorios, que concreta y desarrolla el Proyecto informado, se encuadra dentro del marco legal habilitado por la referida Ley 15/2021, sin perjuicio de la precisión que se realiza en la conclusión sexta.

TERCERA.- La MAIN del Proyecto realiza análisis de impacto económico y sobre la competencia, incorporando los procedimientos judiciales que se han ido creando desde el año 2003 y actualizando los importes correspondientes a los procedimientos ya recogidos en el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre. Ello supone un detalle de todos los procedimientos contemplados por el arancel, con su revisión al alza de los mismos, a salvo de los nuevos procedimientos que se incorporan en el nuevo arancel. Sin embargo, el impacto económico a que se refiere la MAIN no se apoya en una auditoría o estudio económico que justifique las anteriores afirmaciones. A pesar de todo, de las alegaciones incorporadas como Anexo I y Anexo II, recibidas en el trámite de consulta pública previa y en el trámite de audiencia e información pública, respectivamente, se aprecia un grado de consenso considerable con la norma proyectada.

Por ello, siempre que se respeten las cuantías recogidas en el arancel, y que las previsiones presupuestarias del Ministerio de Hacienda y Función Pública no incidan en esta materia rebajando las cuantías previstas, este Consejo no considera relevante la ausencia de un estudio de impacto económico real; en otro caso, se sugiere al prelegislador que el impacto económico sea abordado



por medio de un riguroso análisis a través de una auditoría que realice un examen crítico y sistemático que permita justificar las cuantías y porcentajes recogidos en la norma proyectada.

CUARTA.- El Proyecto menciona en su Exposición de Motivos que “[e]ste real decreto se adecúa a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia”. Sin embargo, se aprecia esta mención es meramente nominal y formal, puesto que en la MAIN no contiene razonamiento alguno debidamente fundado en datos objetivos y contrastables.

QUINTA.- Asimismo, se observa que en el arancel no se contempla una cláusula de actualización de las cuantías del arancel ante un eventual incremento de los precios al consumo. Por todo ello, y en aras a la protección y salvaguarda de las importantes funciones que le corresponde al procurador en el desarrollo del proceso, este Consejo sugiere al prelegislador la introducción de algún tipo de cláusula de actualización de las cuantías del arancel que permita a los profesionales que el ejercicio su función tenga la rentabilidad económica suficiente.

SEXTA.- Cabe dudar de la suficiencia del rango reglamentario para el establecimiento de la obligatoriedad de un presupuesto previo que no viene previsto en la Ley 15/2021, de 23 de octubre, en la medida que ello afecta de modo directo al libre ejercicio de una profesión u oficio (artículo 38 CE), atendiendo a la reserva de ley del artículo 53 CE, y a la doctrina del Consejo de Estado que incide en la necesidad de preservar el sistema de fuentes (cfr. Informe de 14 de febrero de 2008).

SÉPTIMA.- El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) recurrió el Real Decreto 7/2022, de 3 de mayo, representando a todos los Colegios, sin perjuicio de que algunos de ellos también lo hayan recurrido, dando lugar al Recurso Ordinario 566/2022, pendiente de sentencia.

OCTAVA.- El apartado uno del artículo 1 del texto proyectado se limita a establecer que “[e]l presente real decreto tiene como objeto la aprobación del arancel de los procuradores de los tribunales cuyo texto se incluye a continuación”, indicando el apartado segundo que “[d]icho arancel tendrá carácter de máximo, quedando prohibida la fijación de límites mínimos para las cantidades devengadas en relación los las distintas actuaciones profesionales y sobre la cuantía global que no podrá exceder de 75.000 €”, lo que se acomoda a las exigencias de la Comisión, al compromiso asumido



por el Gobierno y a la configuración plasmada en la reciente Ley 15/2021, cuya Exposición de Motivos ya explicita que opta por un sistema de aranceles máximos sin que puedan establecerse límites mínimos. El precepto citado, por tanto, se mueve dentro del principio de jerarquía normativa.

NOVENA.- El artículo 2 del texto proyectado se refiere al ámbito de aplicación, que se extiende, a tenor del apartado primero, a la regulación de los “[d]erechos devengados por los procuradores en las actuaciones profesionales seguidas en toda clase de asuntos judiciales, así como los seguidos ante los órganos no jurisdiccionales y ante las Administraciones públicas, y quedan excluidos los que correspondan al procurador por los demás trabajos y gestiones que practique en función de lo dispuesto en los artículos 1.709 y 1.544 del Código Civil, y demás normas de aplicación.” Asimismo, añade el apartado segundo que quedan excluido del ámbito de aplicación la retribución de los procuradores por su intervención o participación, en cualquier forma, en procedimientos de mediación, arbitraje u otros similares, así como por las gestiones extraprocesales, práctica de actos de comunicación judicial y demás gestiones derivadas del contrato de mandato, que acordará con su cliente o representado.

DÉCIMA.- El artículo 3 del texto objeto de informe, recoge la obligatoriedad de entregar un presupuesto previo, lo que ya está contemplado en la redacción del artículo 2 del Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, en virtud de la reforma operada por el Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo. No existe previsión del prelegislador sobre qué efectos puede tener el presupuesto previo que dé lugar a una rebaja del arancel máximo en la tasación de costas regulada en el artículo 394 LEC, en concreto, en los casos en que haya habido condena en costas de la parte contraria y no sea aplicable el beneficio de justicia gratuita a la parte vencedora en costas. Existen dos opciones para evitar esta situación, tasar las costas según el arancel de máximos, o según lo realmente pagado. En cualquier caso, se sugiere al prelegislador que aclare la cuestión a efectos de evitar la inseguridad jurídica que de ello se pudiera derivar.

DECIMOPRIMERA.- La Disposición transitoria única, rubricada como “[R]égimen transitorio” dispone que “1. Las disposiciones previstas en el presente real decreto se aplicarán a todos los procedimientos que se inicien a partir de su entrada en vigor. 2. Para los procedimientos en tramitación a la entrada en vigor de este real decreto se aplicarán las cuantías del nuevo arancel exclusivamente para las actuaciones que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del mismo”. Por tanto, toda vez que la norma proyectada deroga el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, el régimen de



transitoriedad previsto es aplicable en todo su ámbito a todos los procedimientos que se inicien a partir de su entrada en vigor.

DECIMOSEGUNDA.- En cuanto al articulado del arancel, el Proyecto actualiza las cuantías de los distintos procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales, en las Administraciones Públicas, Jurisdicción Militar, órganos no jurisdiccionales (Tribunal Constitucional), y Tribunales Eclesiásticos, introduciendo por primera vez al Tribunal de Cuentas como órgano no jurisdiccional, y reseñando que se actualizan, asimismo, los distintos procedimientos contemplados de acuerdo a las reformas procesales habidas desde el año 2003 hasta la actualidad, siendo reseñable que se establece unas normas comunes para todos los procedimientos en el Título I rubricado como “[d]isposiciones generales aplicables a todos los órdenes jurisdiccionales.

DECIMOTERCERA.- A lo largo del articulado del arancel existen muchas reglas en las que los derechos se determinan por remisión a los artículos 2 y/o 3 del arancel (Disposiciones generales aplicables a todos los órdenes jurisdicciones, refiriendo el artículo 2 a los procedimientos de cuantía determinada y el artículo 3 a los de cuantía indeterminada y otros procedimientos), según corresponda, siguiéndose el criterio, en su caso, de otorgar un porcentaje concreto de las cuantías indicadas en la tabla del artículo 2 o de la cantidad del artículo 3, entendiendo este órgano constitucional que los porcentajes crean confusión, considerándose más adecuado fijar una cuantía de los derechos a percibir reduciendo los indicados en los artículos 2 y 3 de la norma proyectada en los porcentajes que procedan, por lo que se sugiere al prelegislador una redacción alternativa.

DECIMOCUARTA.- Cabe señalar la confusa redacción de la rúbrica del precepto que se refiere al “[r]ecurso extraordinario de infracción procesal, recursos de casación foral y por infracción de normas”, que, a mayor abundamiento, no tiene correspondencia con la regulación del precepto proyectado, pues de dicha rúbrica se desprende que únicamente se refiere a los recursos de casación foral competencia de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando en los apartados 2 y 3 se refiere al recurso de casación sin más, por lo que es de suponer que se refiera a todos los tipos de recursos de casación, y no solo a los recursos de casación foral. Asimismo, es preciso señalar que no existe ningún recurso por infracción de normas, sino que éste es el único motivo del recurso de casación, a salvo que el prelegislador quiera referirse al recurso en interés de la ley; por ello, se sugiere al prelegislador que aclare la rúbrica del precepto en el sentido de suprimir la palabra “foral” para que pueda entenderse referida a todos los recursos de casación, y que aclare, asimismo, la previsión del recurso por infracción de normas,



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

sustituyéndola, en su caso, en la rúbrica por el recurso en interés de la ley, todo ello con su referencia correspondiente en alguno de los apartados del precepto proyectado.

Asimismo, el precepto no establece la norma referencial concreta de los artículos 2 y/o 3 del arancel a la que han de vincularse dichos aranceles (bien el 60 por ciento de dichos derechos por la interposición y el 40 por ciento de dichos derechos por la tramitación), sino que solo menciona “los derechos que le corresponde en esa instancia”. En consecuencia, se sugiere al prelegislador que supla dicha omisión.

Es cuanto ha de informar el Consejo General del Poder Judicial.

Lo precedente concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y para que conste extiendo y firmo la presente en Madrid, 31 de marzo de 2023.

José Luis de Benito y Benítez de Lugo
Secretario General
(firmado electrónicamente)